

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos antecedentes, por sentencia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, que rola a fojas dos mil ciento sesenta y nueve y siguientes del Tomo VI el Ministro de Fiero don Mario Carroza Espinoza, resolvió:

“EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- *Que, **SE CONDENA** al sentenciado **LUIS ALBERTO MEDINA ALDEA**, ya individualizado en la parte expositiva del presente fallo, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, como autor de los delitos reiterados de torturas y/o tormentos en las personas de Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz, Marcos Erik Pezoa Salfate, Manuel Jesús Lara Bustamante, Alfonso Araya Salinas, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Adolfo Ernesto Lara Bustamante Orlando Martín Moraga Fuentealba, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y María Luisa Gutiérrez Catalán; y en calidad de autor de los delitos de torturas y/o tormentos y abusos deshonestos en la persona de Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, y a las accesorias de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena y al pago de las costas de la causa.*

La pena impuesta se le suspenderá y se le otorga el beneficio de la libertad vigilada intensiva, al reunirse los requisitos del artículo 15 bis de la Ley 18.216, estableciéndose un plazo de intervención de cinco años, y el cumplimiento de las condiciones impuestas en el artículo 17 de la citada ley. Si por cualquier motivo hubiese de cumplir la pena de presidio, se le abonarán los días que permaneció privado de libertad en esta causa, desde el 14 al 27 de julio de 2015, según consta de fojas 529 y 604, y desde el 14 de marzo al 21 de abril de 2016, según se desprende de fojas 1142 y 1249.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

II.- *Que ha lugar a las demandas civiles interpuestas a fojas 1579, 1595 y 1688, con costas, sólo en cuanto, se condena al Fisco de Chile y al demandado civil don Luis Alberto Medina Aldea, a pagar en forma solidaria a cada uno de los actores civiles don Arturo Mariano Droguen Madrid, don Alfonso Araya Salinas, don Juan Carlos Pérez Muñoz, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, don Manuel Jesús Lara Bustamante y a don Alfredo Antonio Martínez Córdova,*



la suma de cuarenta millones de pesos (\$ 40.000.000) por concepto de daño moral, y a don Adolfo Ernesto Lara Bustamante por el mismo concepto, la suma de veinte millones de pesos (\$20.000.000), las que se reajustarán según la variación experimentada por IPC fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas entre la fecha que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria y su pago efectivo, e intereses desde que se constituya en mora”.

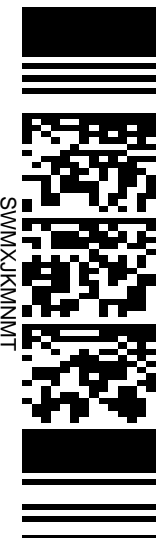
De igual forma, por sentencia complementaria de veintidós de diciembre de dos mil veinte, que rola a fojas dos mil quinientos setenta y tres y siguientes del Tomo VI el Ministro de Fuero don Mario Carroza Espinoza, resolvió: *“Y asimismo, en la parte resolutive del fallo, en el acápite I.-, del apartado “En cuanto a la acción penal”, entre los nombres de “Joel Antonio Quintana García” y “David Eleuterio Quintana García”, reemplácese la “,” por una “y”, finalizando la individualización del segundo con “;”.*

A continuación, se elimina la letra “y” que antecedente al nombre de la víctima “María Luisa Gutiérrez Catalán”, y en su lugar se agrega: “en calidad de autor de los delitos de torturas y/o tormentos con violencia sexual cometidos en la persona de ...” manteniéndose el nombre de la afectada aludida, sumándose luego de su individualización un “;”.

En contra de la signada sentencia, don Abraham Covarrubias Hernández, en representación de don Adolfo Lara Bustamante, don Manuel Jesús Lara Bustamante y don Alfredo Antonio Martínez Córdova, a fojas 2278, recurre de apelación en contra de la sentencia de primera instancia por causarle un gravamen irreparable, dado que la suma indemnizatoria fijada por concepto de daño moral, no se ajusta a derecho, por cuanto no cumple la finalidad de resarcir todo el dolor, molestias y angustias que generaron los actos de tortura y/o tormentos y sus lamentables consecuencias en la persona de los demandantes. De esta forma, solicita se acoja la acción indemnizatoria por daño moral en favor de sus representados, en la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) para cada uno de ellos con reajuste e intereses desde la fecha de la notificación de la demanda civil y; que se condene en costas a la recurrida.

A fojas 2283, el condenado Luis Alberto Medina Aldea, al momento de ser notificado de la sentencia definitiva de primera instancia, apeló verbalmente.

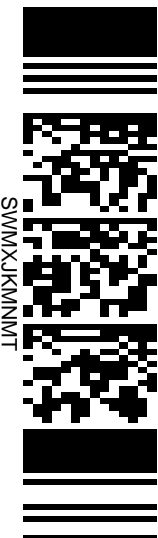
A fojas 2284, recurre de apelación doña Carolina Vásquez Rojas, abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del



Estado, por el Fisco de Chile, en cuanto en la sentencia definitiva se acogieron las demandas civiles deducidas, condenando a su representado a pagar la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a los demandantes don Arturo Mariano Droguett Madrid, don Alfonso Araya Salinas, don Juan Carlos Pérez Muñoz, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, don Manuel Jesús Lara Bustamante y don Alfredo Antonio Martínez Córdova y a don Adolfo Ernesto Lara Bustamante a la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos). Funda los agravios en el rechazo de la excepción de reparación satisfactiva opuesta respecto de los demandantes; el rechazo de la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco; el monto de la indemnización otorgada por daño moral resulta excesiva y; la improcedencia de la condena en costas. Solicita, se revoque la sentencia apelada, en la parte civil que atañe al Fisco de Chile y se resuelva en su lugar que, se rechaza en todas sus partes, con costas, la demanda de autos o se rebaje prudencialmente los montos de indemnización a los que fueron condenados por el sentenciador de primera instancia.

Por su parte, a fojas 2306 apela doña Marcia Fuentes Morales, por los querellantes don Juan Carlos Pérez Muñoz, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno y don Alfonso Araya Salinas, solicitando la modificando de la sentencia de primera instancia, en su parte civil, concediéndose a sus representados una indemnización a los cuatro primeros por \$100.000.000 (cien millones de pesos) y al último de \$70.000.000 (setenta millones de pesos)

Por último, a fojas 2311, el abogado don Fernando Dumay Burns, por el condenado Luis Alberto Medina Aldea, deduce recurso de casación en la forma, fundado en las causales del artículo 541 N° 2 y N° 9 del Código de Procedimiento Penal en relación a los numerales 4° y 5° del artículo 500 del referido cuerpo normativo. Solicita se invalide el fallo y en resolución separada, pero sin nueva vista, se dicte una sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, declarándose que se absuelve a su representado de todos los cargos, por no encontrarse acreditada su participación en el delito. Asimismo, interpone en subsidio de la casación, recurso de apelación en el primer otrosí de su escrito de fojas 2311, solicitando se revoque, conforme a derecho la sentencia apelada, dejándola sin efecto, dictándose en su reemplazo una que absuelva al acusado de toda responsabilidad en los hechos investigados.

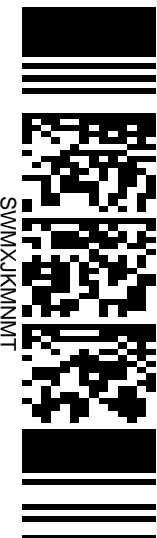


El Ministerio Público Judicial, a través del Informe del Fiscal señor Daniel Calvo Flores de fojas 2384, en primer término, refiere que, respecto de los asuntos civiles, atendida la naturaleza de estas acciones, no emitirá pronunciamiento a su respecto.

Indica que previo a entrar a informar el asunto en sus aspectos punitivos, como se lee a fojas 2.311, la defensa del encausado Medina Aldea, ha interpuesto recurso de nulidad formal en contra del fallo de marras, basándolo en dos causales, en la de los numerales 2° y 9° del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, arbitrio que expresa debe ser desestimado.

Agrega que en caso que esta Corte no comparta la tesis indicada, es decir que estime que el fallo carece de los razonamientos adecuados, igualmente el recurso que se analiza debe ser rechazado, ya que en esta situación viene al caso recordar que conforme al mandato legal contenido en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la situación de marras de conformidad al artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal podrá desestimar el recurso de casación en la forma, si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la invalidación del fallo, cuestión que queda de manifiesto al constatar que el mismo letrado que defiende a Medina Aldea, conjuntamente con el recurso de nulidad formal (pero lo deduce en subsidio), ha interpuesto apelación, a través del cual podría subsanarse cualquiera de los vicios que constatare o se detectare en la sentencia que se cuestiona.

En lo concerniente a los aspectos punitivos o de fondo, en primer lugar, manifiesta que el establecimiento de los hechos, de los que da cuenta el razonamiento segundo, conforme a los antecedentes o pruebas recopiladas en el transcurso de la investigación a los que se refiere el fundamento primero, el Fiscal Judicial comparte la calificación jurídica que se realiza en el tercer basamento de la sentencia en estudio. Así, estima ajustado al mérito de autos, la situación de que don Marcos Erick Pezoa Salfate (fallecido), don Alfonso Araya Salinas, Orlando Martín Moraga Fuentealba, (fallecido), don Adolfo Lara Bustamante, don Manuel Jesús Lara Bustamante, don María Luisa Gutiérrez Catalán, don Joel Antonio Quintana García, don David Eleuterio Quintana García, don Alfredo Antonio Martínez Córdova, don Arturo Mariano Droguett Madrid, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, don



Juan Carlos Pérez Muñoz y doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito fueron víctimas de torturas y/o tormentos o apremios ilegítimos, delito tipificado en el N° 1 del artículo 150 del Código Penal vigente; y del delito de abusos deshonestos en la persona de la misma mencionada Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, figura punitiva que previene y sanciona el artículo 366 del Código Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos, como se refiere en el considerando tercero ya mencionado.

En cuanto a la participación del enjuiciado Luis Alberto Medina Aldea, en las fundamentaciones cuarta a octava en el fallo que se examina, el Fiscal Judicial concuerda con lo razonado por el sentenciador, en el sentido que el condenado reviste o tiene la calidad de autor en los ilícitos antes señalados. Asimismo, comparte las motivaciones décimo quinto a décimo séptimo, en que se desestiman sus alegaciones planteadas en el escrito de descargo o de contestación de la acusación, ya sea que no se encuentra justificada su participación en calidad de autor, por cuanto ellos fueron perpetrados en la oficina de la Fiscalía Militar, aunado a que no se configura el error en su persona.

Sin perjuicio de lo antes señalado en lo que se refiere a los hechos punibles y a la participación, llama la atención al Fiscal Judicial que, en el punto 4 del considerando segundo, se fija como un hecho que doña María Luisa Gutiérrez Catalán, además de las torturas sufrió de violencia sexual, situación que si bien también es mencionada en el auto de procesamiento y en la acusación, como se lee a fojas 1.138 y 1.521, respectivamente, no existe pronunciamiento alguno que determine quién o quiénes son responsables de este delito, ya sea como autor, cómplice o encubridor o la dictación de la resolución que en derecho correspondía al tenor de lo señalado en el artículo 409 del Código Procesal Penal, situación que, estima el informante podría ser subsanada por esta Corte, disponiendo que una vez resuelto el conocimiento de este asunto, vuelvan los autos al juez de primer grado, a fin de que proceda a dictar la o las resoluciones que sean las adecuadas.

Respecto a las eximentes de responsabilidad penal, como lo son la amnistía y la prescripción de la acción penal, el señor Fiscal Judicial comparte el criterio desarrollado por el ministro instructor referido a la improcedencia de aplicar en este caso, los mentados institutos, según se lee en las fundamentaciones décimo tercera y décimo cuarta, respectivamente.



También estima inaplicable, en estos casos de delitos de lesa humanidad, la figura de la media prescripción, en los términos que señala el artículo 103 del Código Penal y, por ende, comparte la tesis expuesta por el juez de mérito en las fundamentaciones décimo octava y décimo novena.

Indica que la defensa del condenado, también alegó la eximente de responsabilidad penal fijada en el numeral 10° del artículo 10 del Código Penal, denominada por la doctrina de la obediencia debida, la que es desestimada en la sentencia en estudio en la fundamentación vigésima, criterio que también es compartido por el señor Fiscal Judicial.

En lo referente a otros asuntos u alegaciones propuestos por la defensa del enjuiciado, como lo son las atenuantes de responsabilidad penal, el Fiscal Judicial comparte las argumentaciones del sentenciador, conforme las fundamentaciones vigésimo primera a vigésimo cuarta, en que sólo acepta las del numeral 6° del artículo 11 del Código Penal y la especial contenida en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, como también la improcedencia de aceptar la del numeral 9 del artículo 11 del Código Penal y la del artículo 214 del mencionado Código de Justicia Militar

Además, aprecia que la fundamentación vigésima quinta, al determinar la sanción aplicable, se ajusta a derecho y al mérito de los antecedentes, dada la penalidad señalada por la ley para los delitos de esta causa, a la data de ocurrencia de los hechos, entendiendo que entre el delito de aplicación de tormentos o de tortura y el de abusos deshonestos que sufrió Rosa Bustamante hay un concurso ideal de delitos. Asimismo, sostiene que es correcto considerar que el condenado se encuentra beneficiado por dos circunstancias atenuantes, sin que le afecte agravante alguna, como también que ha incurrido en reiteración en la comisión de los ilícitos. Con todo, asevera que la sanción punitiva que corresponde imponérsele es al delito más grave en el grado superior, la que debe ser aumentada en un grado por motivo de la reiteración y, con posterioridad, por las minorantes, rebajada en un grado.

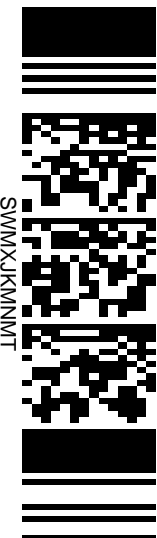
Finalmente, sugiere que la sentencia sea confirmada, en cuanto en sus aspectos punitivos, al condenar a Luis Alberto Medina Aldea, a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales por los delitos de aplicación de tormentos en las personas de don Arturo Mariano Droguett Madrid, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, don Juan Carlos Pérez Muñoz, don Marcos Erick Pezoa Salfate, don Manuel Jesús Lara Bustamante, don



Alfonso Araya Salinas, don Alfredo Antonio Martínez Córdova, don Adolfo Ernesto Lara Bustamante, don Orlando Marín Moraga Fuentealba, don Joel Antonio Quintana García, don David Eleuterio Quintana García y don María Luisa Gutiérrez Catalán y, además, en calidad de autos de los delitos de torturas y/o tormentos y de abusos deshonestos en la persona de doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, teniéndose presente que no existió pronunciamiento en cuanto al delito de que fue víctima doña María Luisa Gutiérrez.

Con fecha 1 de diciembre de 2020, se ordenó como trámite que el Ministro Instructor emitiera pronunciamiento, en cuanto a lo evidenciado por el señor Fiscal Judicial, en torno a que no existe resolución sobre la participación en un hecho en que doña María Luisa Gutiérrez Catalán, además de las torturas sufrió de violencia sexual o la dictación de la resolución que en derecho correspondía al tenor de lo señalado en el artículo 409 del Código Procesal Penal y que a ese respecto dictara la resolución complementaria o rectificatoria que corresponda.

Luego, a fojas 2573 y siguientes, por sentencia complementaria de 22 de diciembre de 2020, el Ministro Carroza, intercaló un considerando 2º Bis, en que, con el objeto de ajustar los hechos descritos a los contenidos en el auto acusatorio y su correlato, se refiere a las torturas y/o tormentos que sufrió doña María Luisa Gutiérrez Catalán y señala que, por su forma de realización, constituirían una forma específica de violencia contra la mujer. Luego, indica que se reconoce y visibiliza la violencia sexual perpetrada contra la afectada en el delito de tortura y como forma de garantizar y respetar los estándares internacionales del Sistema Universal e Interamericano de DD.HH., que abordan el problema de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género. En la parte resolutive, rectifica la sentencia en el sentido que se condena al sentenciado por el delito de torturas y/o tormentos sólo respecto de las 12 víctimas hombres y de María Luisa Gutiérrez, condenándosele como autor de los delitos de torturas y/o tormentos con violencia sexual y mantiene lo señalado respecto de la víctima doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito. Asimismo, se condenó al sentenciado por el delito de torturas y/o tormentos y abusos deshonestos. En consecuencia, no hay modificación en cuanto a la pena -en definitiva, son tres delitos y no dos como se había indicado en la sentencia original-.



A fojas 2584, se notificó al encartado de la sentencia complementaria dictada con fecha 22 de diciembre de 2020 y que rola a fojas 2573 y siguientes, quien apeló verbalmente.

Por su parte, a fojas 2593 y siguientes, en su informe de 31 de marzo de 2021, el señor Fiscal Judicial Calvo, señala que en la sentencia complementaria no se trata o refiere al problema del partícipe y tampoco se precisa en la parte resolutive, por lo que el vicio denunciado aún no se subsana.

Por resolución de 15 de abril de 2021, la Sala Tramitadora ordenó que volvieran los autos a primera instancia, a fin que se diera estricto cumplimiento a lo decretado con fecha 1 de diciembre de 2020.

A fojas 2597 y siguientes, en informe de 26 de abril de 2021, el Ministro Instructor señor Guillermo de La Barra Dünner, da cuenta de las piezas del expediente (auto de procesamiento, acusación, sentencia, informe fiscal, resolución que ordena el trámite, sentencia complementaria) y concluye que los reparos o eventuales omisiones que hace notar el último dictamen fiscal, habrá de hacerse cargo la Corte al conocer de los recursos de casación en la forma y apelación deducidos en contra de la sentencia definitiva.

Por resolución de 06 de mayo de 2021, la Sala Tramitadora tuvo por cumplido lo ordenado y ordenó que rigiera el decreto de autos en relación.

Se trajeron los autos en relación.

VISTOS:

A.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO: Que a fojas 2311 y siguientes, el abogado don Fernando Dumay Burns, por el condenado Luis Alberto Medina Aldea, deduce recurso de casación en la forma, fundado en las causales del artículo 541 N° 2 y N° 9 del Código de Procedimiento Penal en relación a los numerales 4° y 5° del artículo 500 del referido cuerpo normativo.

Indica que la causal del número 2 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal se configura en cuanto se señaló en el escrito de contestación, observaciones a la prueba y téngase presente allegados por su parte al proceso, que la defensa primero dentro del sumario, luego en la contestación y después durante el plenario, solicitó reiteradamente la realización de distintas diligencias tendientes a establecer la falsedad de los hechos en virtud de los que el señor Ministro Instructor tuvo por acreditada



la existencia del hecho punible y la participación de su representado, no respetándose con ello lo dispuesto en el artículo 109 del Código de Procedimiento Penal.

En segundo término, en cuanto a la causal contemplada en el artículo 541 N° 9 en relación con el artículo 500 N° 4 del signado cuerpo legal refiere que, para desvirtuar la presunción de inocencia es preciso que el tribunal establezca en una sentencia definitiva, los medios de prueba y los razonamientos que fundamentan las consideraciones que permitirían tener por cierta la participación del encartado, arribándose de esta forma a una decisión condenatoria, haciéndose cargo de todas las alegaciones formuladas por su parte, lo que en la especie no aconteció.

Solicita se invalide el fallo y en resolución separada, pero sin nueva vista, se dicte una sentencia conforme a la ley y al mérito del proceso, declarándose que se absuelve a su representado de todos los cargos por no encontrarse acreditada su participación en el delito.

SEGUNDO: Que el artículo 541 N° 2 del Código de Procedimiento Penal dispone que: *“El recurso de casación en la forma sólo podrá fundarse en alguna de las causales siguientes:*

2° No haber sido recibida la causa a prueba, o no haberse permitido a alguna de las partes rendir la suya o evacuar diligencias probatorias que tengan importancia para la resolución del negocio. Para alegar esta causal contra una sentencia de segunda instancia será menester que se haya pedido expresamente, en dicha instancia, que se reciba la causa a prueba y que este trámite sea procedente”.

TERCERO: De acuerdo al análisis de las diversas piezas del expediente aparece que la causal planteada carece de asidero, ya que las alegadas en el etapa sumarial, no dan motivo al recurso que se analiza, y las sostenidas en el plenario, según rola a fojas 2.037, evidencian que el asunto fue recibido a prueba por el término legal y, en lo que se refiere a impedirle aportar sus probanzas o evacuar diligencias probatorias, basta tener presente que las propuestas por la defensa del encausado Luis Medina Aldea en su escrito de descargo, según obra a fojas 1.818 se aceptaron por el Ministro Instructor, pero no fueron aportadas o presentadas en el transcurso de la mentada etapa procesal, ni tampoco se insistió en que ellas fueran cumplidas. Asimismo, las que se desestimaron en la resolución que obra a fojas 1.998 fueron cuestionadas a través de un recurso de apelación deducido de manera extemporáneo, por lo que no se encuentra preparado



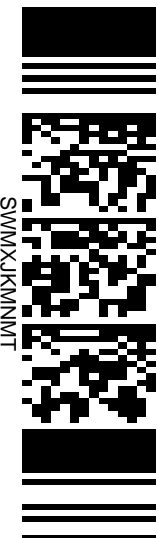
el recurso, al tenor de lo señalado en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este caso, conforme lo preceptúa el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal.

CUARTO: Que, en cuanto a la segunda causal de impugnación de nulidad formal, reza el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal: *“No haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley”*. En este caso, la defensa del encartado echa de menos, el cumplimiento a los numerales 4° y 5° del artículo 500 del referido cuerpo normativo, los que establecen respectivamente: *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta;”* y; *“Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio;”*

QUINTO: Que la segunda causal de nulidad formal impetrada por la defensa del condenado tampoco puede prosperar, por cuanto la sentencia recurrida no incurre en el vicio denunciado, ya que ella contiene los fundamentos de hecho y de derecho y las citas doctrinarias aplicables al caso concreto, conforme lo disponen los numerales 4 y 5 del artículo 500 cuya vulneración denuncia en su recurso, los que permiten establecer el hecho punible y la participación del condenado Luis Alberto Medina Aldea.

No obsta la decisión anterior, que los fundamentos expresados en la sentencia recurrida no sean compartidos por la defensa del condenado, quien no los considera claros y completos y que, en tal sentido, no coincida con sus planteamientos, ya que resultan ser escenarios distintos, no compartir las razones y afirmar la ausencia de ellas.

SEXTO: Por su parte, aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio que sea reparable sólo con la invalidación del fallo, ya que las presuntas irregularidades planteadas en las motivaciones que preceden, puede ser corregida por la vía de la apelación que también se ha interpuesto en contra de la sentencia, por lo que se desestimaré la nulidad formal pretendida en cuanto a las causales que se vienen analizando -razonamientos todos que se encuentran contestes con lo manifestado por el señor Fiscal Judicial en su dictamen, agregado a fojas 2384 y siguientes en cuanto al rechazo de la nulidad impetrada-.



Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 510 y siguientes y 541 del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa del condenado Luis Alberto Medina Aldea** en contra de la sentencia dictada con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por el señor Ministro Instructor Mario Carroza Espinosa.

B.- EN CUANTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN:

Se reproduce la sentencia en alzada, eliminándose en la motivación trigésimo cuarta, “con costas” y el nombre de “Manuel Jesús Lara Bustamante” y el considerando segundo bis de la sentencia complementaria de veintidós de diciembre de dos mil veinte.

Y SE TIENE, ADEMÁS, Y EN SU LUGAR PRESENTE:

I.- EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

SÉPTIMO: Que, los supuestos fácticos tenidos por ciertos, obran en el considerando segundo, a saber:

“1.- El día 11 de septiembre de 1973, se decreta estado de sitio en todo el territorio de la República de Chile, y estado de emergencia en las provincias y departamentos del país, y designado como Jefe e Intendente de la entonces provincia de O’Higgins el Coronel de Ejército Cristián Ackerknecht San Martín, quien para cumplir dichas funciones, deja de prestar labores directamente en el Regimiento de la ciudad y organiza una oficina de informaciones en dependencias de la antigua Intendencia de Rancagua, ubicada en la plaza principal de esa ciudad. Asimismo, y por instrucción directa del citado Coronel, se constituye al interior de dicho inmueble la Fiscalía Militar a cargo del Capitán de Ejército Bruno Enriotti Zuleta (fallecido), ante la cual se realizaron numerosos Consejos de Guerra.

Establecido el servicio de inteligencia en la ciudad de Rancagua, éste contaba con un equipo colaborador que estaba conformado por dos funcionarios de Investigaciones de apellidos Acevedo y Fagalde (ambos fallecidos) y también, por el entonces Teniente del Ejército Luis Alberto Medina Aldea, quien se dedicaba a la identificación e interrogatorio de las personas detenidas por motivos políticos, para ello se le releva temporalmente de sus funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña N° 22 Lautaro, a modo que cumpliera exclusivamente funciones en la Fiscalía Militar y ejerciera eventualmente, como secretario del Tribunal Castrense.



Entre las actividades y operativos realizados por el servicio de inteligencia a partir del mes de septiembre de 1973 en la entonces provincia de O'Higgins, resultaron privados de su libertad personal y luego fueron interrogados en dependencias de la antigua Intendencia, Marcos Erik Pezoa Salfate, Alfonso Araya Salinas, Orlando Martín Moraga Fuentealba, Adolfo Lara Bustamante, Manuel Jesús Lara Bustamante, María Luisa Gutiérrez Catalán, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y Alfredo Antonio Martínez Córdova, todos militantes del Partido Comunista o Partido Socialista, a excepción de María Gutiérrez Catalán, quien era funcionaria del Juzgado de Policía Local de Machalí.

Una vez detenidos por distintas unidades policiales y militares de la Región, fueron trasladados e ingresados a la Cárcel Pública de Rancagua, y en el caso de María Gutiérrez Catalán en la Cárcel de Mujeres, "El Buen Pastor", de la misma ciudad. Desde esos lugares conducidos en distintas fechas y horas por funcionarios de Investigaciones o del Ejército hasta las instalaciones en que estaba instalada la Fiscalía Militar.

En dependencias de la Fiscalía Militar los detenidos fueron interrogados por el equipo designado para esas funciones, siendo sometidos a sesiones de torturas, les golpearon con los puños, pies, y un "tonto de goma" -vara metálica recubierta con goma-, en distintas partes de sus cuerpos, les aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, manos, brazos, piernas y rostro, y además fueron amenazados de muerte. María Gutiérrez Catalán conjuntamente con los flagelos descritos fue violentada sexualmente.

Los detenidos, Manuel Lara Bustamante, Adolfo Lara Bustamante, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Joel Antonio Quintana García y David Eleuterio Quintana García, fueron condenados en Consejo de Guerra, y el resto quedó en libertad en diferentes fechas, entre los meses de octubre de 1973 y enero de 1976, sin que hubiesen sido sometidos a proceso alguno.

El servicio de inteligencia continuó su funcionamiento, y a mediados de mes de diciembre de 1973 por orden de la Fiscalía Militar de Rancagua, se realizó un operativo en el sector de la Población Esperanza de esa ciudad, coordinado por el Ejército y por la Policía de Investigaciones, en el que resultaron detenidos Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz y Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años de edad. Los detenidos fueron en primer



lugar retenidos en el Cuartel de Investigaciones, luego trasladados al ex Presidio y ex Cárcel de Mujeres "El Buen Pastor", respectivamente, y llevados posteriormente en reiteradas ocasiones a la Fiscalía Militar de la ciudad de Rancagua.

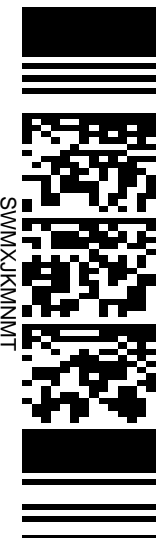
En el primer recinto fueron sometidos a interrogatorios por funcionarios de la institución, quienes les propinaron golpes de pies y puños, y además los golpearon con un "tonto de goma" -vara metálica recubierta con goma-.

En circunstancias que se encontraban en dependencias de la Fiscalía Militar, ubicada al interior de la Intendencia de la ciudad en aquella época, nuevamente son sometidos a sesiones de torturas y apremios ilegítimos, interrogados con la vista vendada, reciben constantes amenazas de ejecución, les propinaron golpes de puños y patadas en diferentes partes de sus cuerpos, recibieron descargas eléctricas en manos, brazos, pies y testículos en el caso de los hombres, y aplicación de descargas eléctricas en los pezones y abusos deshonestos en el caso de la única mujer de este grupo de detenidos, quien sufrió tocaciones en sus senos, le desgarraron la ropa y se frotaron con su cuerpo desnudo encima de un escritorio.

Este grupo de jóvenes que se encontraban detenidos en el ex Presidio de Rancagua, y en la Cárcel de Mujeres "El Buen Pastor", fueron dejados en libertad el 31 de diciembre de 1973, sin que hubiesen sido sometidos a proceso por tribunal alguno”.

OCTAVO: Que, no resultó controvertido y objeto de apelación que los presupuestos fácticos antes signados deben ser calificados como **crímenes de lesa humanidad** y consecuentemente con ello, la **imprescriptibilidad de la pena y la imposibilidad de aplicar la amnistía en relación a los mismos.**

NOVENO: Que, tampoco hubo discusión que los hechos tenidos por ciertos por el juzgador del grado debían calificarse como constitutivos del **delito de torturas y/o tormentos o apremios ilegítimos** en las personas de don Marcos Erik Pezoa Salfate -fallecido-, don Alfonso Araya Salinas, don Orlando Martín Moraga Fuentealba -fallecido-, don Adolfo Lara Bustamante, don Manuel Jesús Lara Bustamante, doña María Luisa Gutiérrez Catalán, don Joel Antonio Quintana García, don David Eleuterio Quintana García, don Alfredo Antonio Martínez Córdova, don Arturo Mariano Droguett Madrid, don Luis Alfonso Pérez Moreno, don Francisco Ramón Abarca Moreno, don Juan Carlos Pérez Muñoz y doña Rosa



Victoria Bustamante Valdebenito, ilícito previsto en el artículo 150 N° 1 del Código Penal vigente; y **el delito de abusos deshonestos** en la persona de Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, contemplado en el artículo 366 del Código Penal; ambas normas vigentes a su fecha de ocurrencia, tal como se consignó en la motivación tercera de la sentencia recurrida.

DÉCIMO: Que, en lo concerniente a la **participación**, se comparte la acreditación y calificación que efectúa el sentenciador -en los considerandos cuarto a octavo, decimoquinto a decimoséptimo- al subsumirlos en la hipótesis del **artículo 15 N° 1 del Código Penal**.

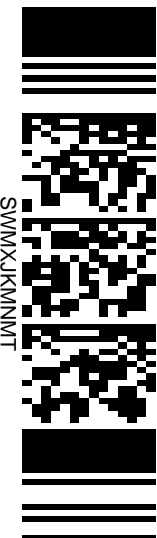
En efecto, se acreditó en primer término que, el encartado a partir del 11 de septiembre de 1973 cumplió labores de inteligencia en la Fiscalía Militar de la ciudad de Rancagua y de un Centro de Inteligencia -reconocido por el condenado y otros testigos- en dependencias de la ex Intendencia, contándose además con diferentes elementos de convicción consistentes en:

1.- Denuncia de don Arturo Mariano Droguett Madrid de fojas 1 y siguientes, quien sindicó al autor de los hechos de que fue víctima él y su tío Carlos Droguett al “Teniente Medina”.

2.- Declaraciones de don Carlos Hugo Valdivia Veliz de fojas 29 y 740, quien asevera que hubo detenidos que se quejaban del trato que se les daba entre los que se encontraba un Teniente de apellido Medina.

3.- Declaración de don Marcos Saúl Droguett Ulloa de fojas 39, quien refiere que fue detenido el 13 de octubre de 1974 junto a su hermano Carlos Droguett Ulloa y que supo por él y su sobrino Arturo que habían sido torturados en la Fiscalía Militar y que nombraban mucho a un Teniente de apellido Medina. Precisa que se le reportó por parte de los signados familiares, que el encartado los había golpeado y que además estuvo presente en las torturas y que incluso le aplicaron electricidad en los testículos y enterrado una aguja en la yema de los dedos.

4.- Declaraciones de don Luis Alfonso Pérez Moreno, de fojas 315 y 518, quien manifiesta que en la época de ocurrencia de los hechos fue detenido y que en los interrogatorios en la Fiscalía Militar siempre se encontraba presente Acevedo -funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile- y un militar de apellido Medina, quien lo golpeó en varias ocasiones en distintas partes de su cuerpo, principalmente en su rostro, por cuanto lo sindicaba como el líder del grupo por ser el mayor de edad. Recordó que Medina era alto, de unos 80 kilos, de pelo oscuro. Por su



parte, en diligencia de careo realizada entre don Luis Pérez Moreno y el condenado, el primero expuso que ratificaba sus dichos, en cuanto se presentó voluntariamente al Cuartel de Investigaciones de Rancagua donde permaneció detenido con un grupo de menores. Luego fue ingresado a la cárcel de esa ciudad, siendo brutalmente interrogado en la Fiscalía Militar por varios funcionarios de investigaciones y militares, entre ellos uno de apellido Medina, a quien reconoce en la fotografía que se le exhibe y que rola a fojas 328. Además, señala que reconoce a la persona con quien se le carea, tratándose del Teniente Medina, quien golpeó a su hermano y a él, en dependencias de la Fiscalía Militar.

5.- Declaraciones de don Francisco Ramón Abarca Moreno, de fojas 318 y 516, quien refiere que en el año 1973 estuvo detenido junto a Mariano y Arturo Droguett, con su hermanastro Luis Pérez y con Carlos Pérez. Añade que fue conducido juntos a los demás aprehendidos a la Fiscalía Militar con el objeto de ser interrogados, los que eran coordinados por Medina con la participación de Acevedo. Puntualizó que los interrogatorios en la Fiscalía Militar eran más duros que en el Cuartel de Investigaciones y que Acevedo lo golpeaba y aplicaba electricidad en sus brazos, piernas, dedos de los pies y en las manos, no recordando bien el aparato que utilizaba para electrocutar. En la diligencia de careo realizada entre don Francisco Albarca Moreno y en encausado Luis Alberto Medina Aldea, el primero ratifica sus dichos y una vez que el Tribunal le exhibe fotografías de fojas 216, indicó que dicha persona corresponde al segundo de los anteriores, a quien ha signado como autor de las conductas descritas con antelación. Luego expresa respecto a la persona con quien se le carea que, no puede afirmar que se trate del militar Medina que señala en su declaración. No obstante, lo anterior, insiste que se mantiene en sus dichos, en el sentido que fue flagelado en la Fiscalía Militar por un militar de apellido Medina, quien lo abofeteó fuertemente cuando le comentó que creía que su edad era de 70 años.

6.- Declaraciones de don Juan Carlos Pérez Muñoz, de fojas 374 y 520, quien expresa que fue detenido en diciembre de 1973 junto a Victoria Bustamante, Carlos Droguett, Arturo Mariano Droguett, Luis Pérez Moreno y Ramón alías “Moncho”. Asevera que la primera vez que los interrogaron estaban todos juntos en una sala y había un militar de apellido Medina, el que medía más de 1.70 de estatura, delgado, tez blanca, a quien reconoció en la fotografía exhibida por el Tribunal, rolante a fojas 327 y 328. Precisa



que la persona que sindicó, se encontraba presente en todas las sesiones de interrogatorio, mostrándose violento y lo que más le interesaba era que le entregaran nombres, aunado a que en reiteradas oportunidades lo amenazó de muerte y en otras, lo golpeó de manera individual o grupal. Agrega que, los golpes eran de puños y pies en distintas partes del cuerpo, pero no en la cara. Cree que tenía clases de karate porque les pegaba patadas en el pecho que los hacía saltar muy lejos. Añade que Medina sacaba su revólver y les apuntaba en la cabeza. En otras ocasiones los tendían en el suelo y les colocaban sacos de papas encima y luego los golpeaban. Expresa que los interrogatorios y torturas se repitieron casi día por medio desde que fue detenido. En algunas oportunidades lo llevaban sólo a la Fiscalía y en otra iba todo el grupo de menores para ser interrogados juntos. Asevera que vio cómo a Carlos y Mariano Droguett les aplicaron descargas eléctricas con una máquina a la que le daban cuerda, por cuanto tenía dos cables que se los colocaban en las manos. En otra instancia en que fueron todos los detenidos a la Gobernación, los comenzaron a llamar de a uno para que declararan, sin embargo, cuando terminaban los interrogatorios de Carlos y Mariano Droguett, salieron tan disminuidos que nadie más entró a deponer, dado que a Investigaciones y a Medina se les le había pasado la mano con la aplicación de corriente. Al ser careado don Juan Carlos Pérez Muñoz con el acusado Luis Medina Aldea, el primero ratificó sus dichos, además de que luego que el tribunal le exhibió la fotografía de fojas 328, indicó que sin dudas corresponde a la persona de apellido Medina, a quien menciona en sus atestados. Sin perjuicio de lo anterior, al ser consultado si reconoce a la persona que se encuentra a su lado, expresa que no, porque han pasado muchos años. Además, manifestó que Medina lo golpeó con sus puños y pies, recordando las patadas estilo “karateka” que le daba, aunado a que participó en todas sus sesiones de interrogatorios en la Intendencia.

7.- Declaraciones de doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito de fojas 378 y 517, quien expuso que al tiempo de ser detenida en el año 1973 tenía 17 años de edad, percatándose que en las celdas colindantes estaba Mariano Droguett Madrid, Carlos Arturo Droguett Ulloa, Ramón Abarca Moreno, un hermano de él Luis Pérez Moreno -alias "Pullía"-, Jaime Jaqui Orellana y Juan Carlos Pérez Muñoz. Afirma que, al día siguiente, todos fueron trasladados a la Intendencia, oportunidad en que llegó un militar a quien le decían "Fiscal Medina" -alto, delgado, pelo negro, ni gordo ni flaco, de buena contextura física-, al que reconoció en las fotografías de



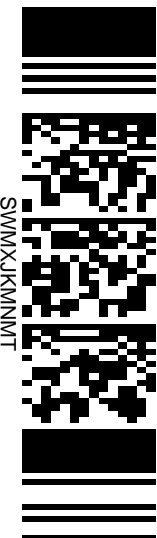
fojas 327 y 328 que el tribunal le exhibe. Añade que, Acevedo le presentó a Medina y le dijo *"aquí están los pastelitos"*. Luego hicieron pasar a Carlos Droguett a una sala contigua al pasillo donde se encontraban, escucharon gritos de dolor, sin saber lo que le estaban haciendo, pero cuando terminó su interrogatorio, abrieron la puerta y lo lanzaron como un saco de papa, advirtiéndose que tenía su rostro rojo, con claras evidencias de haber sido golpeado, además de que presentaba sus dos muñecas quemadas por las descargas eléctricas que le aplicaron. Señala que después la hicieron pasar, Acevedo le anunció a Medina *"este es el pez gordo"*, el detective la tomó del pelo y la sentó frente al encausado, quien le preguntó por las armas y las bombas, oportunidad en que el primero, le pegó en la cara al escuchar sus respuestas, mientras el segundo, le decía que hablara o sino le aplicaría corriente y la violaría. En ese momento, el detective le desgarró la ropa y comenzó a tocar sus senos y a manosearle su cuerpo, apretándole su cuerpo contra el escritorio. Manifiesta que, en ese acontecer, Medina desde el otro lado le tocaba los pechos y al final le aplicaron corriente en las manos con una máquina que tenía dos cables rojos, los que le colocaron uno en cada brazo. Añade que como no hablaba, la amenazaron de muerte, y le dijeron que matarían a todo el grupo de menores de edad que estaban detenidos. Preciso que en el interrogatorio estuvo unas dos horas, luego la lanzaron hacia afuera toda golpeada y con la ropa desgarrada. Con posterioridad, llamaron a Mariano Droguett para interrogarlo, recuerda que sentía sus gritos de dolor y los golpes y que seguramente le aplicaron corriente porque suplicaba que pararan. Puntualiza que, durante su prisión, casi todos los días la llevaban a la Intendencia y que las torturas se repitieron constantemente, en las que siempre participaba Acevedo, Fagalde y Medina, golpeándola en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza con una especie de palo. Refiere que le aplicaron descargas eléctricas en las muñecas, pezones y distintos lugares del cuerpo, producto de los cuales se tuvo que operar en el Hospital de Rancagua por un quiste que le apareció en el seno derecho. Recuerda que siempre la manoseaban. Expresa que en una ocasión Medina la desnudó, la agarró y la puso sobre el escritorio con la intención de violarla, a lo que se resistió, razón por la que fue golpeada brutalmente. En otra ocasión, Acevedo le mordió el hombro izquierdo porque se resistió a que la violara. Incluso, algunas veces se desmayó del dolor. Señaló que estuvo privada de libertad cerca de tres meses, siendo liberada el 30 o 31 de diciembre de 1973, y en el mes de enero de 1974



tuvo que abandonar el país con destino a Brasil. Como secuela de las torturas, expresa que, mantiene una cicatriz en la parte superior de su labio, y una cardiopatía que se sigue tratando. En diligencia de careo efectuada entre el acusado Luis Medina Aldea y doña Rosa Bustamante Valdebenito, esta última ratificó sus dichos y manifestó que la persona con quien se le carea es el militar de apellido Medina aludido con anterioridad, agregando que él y los funcionarios de investigaciones la interrogaron, golpearon, maltrataron y abusaron sexualmente. El tribunal le exhibió fotografía de fojas 216 y 328, las que señala corresponden a Medina. Reitera que Medina le aplicó corriente en sus muñecas, manos y pezones, que la hizo desnudarse y le tocó todo su cuerpo, especialmente sus senos y muslos. Afirma que también fue abusada por Acevedo y Fagalde en presencia de Medina. Reitera que Medina estuvo presente en todas sus sesiones de interrogatorios.

8.- Declaraciones de don Marcos Erik Pezoa Salfate de fojas 573 y 1033, quien manifestó que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 por personal de Carabineros al tiempo en que transitaba por la Plaza de Rancagua, camino a su casa, la que quedaba detrás de la Intendencia. Luego de haber permanecido 42 días en la cárcel, lo trasladaron a la Fiscalía Militar, instancia en que al ser interrogado apareció el Teniente Medina, militar que andaba con una vara de bronce, quien le dijo que estaban en guerra y que lo dejaría con los funcionarios a quienes tenía que responderles todo lo que le preguntaran. Entonces expresó que Acevedo le quitó los lentes y lo golpeó en el rostro. En un momento ingresó Medina, quien pudo observar los golpes a los que estaba siendo sometido, los que se fueron intensificando. Recuerda que no volvió a ver a Medina, sin embargo, todos sus compañeros señalaban que Medina los interrogaba y torturaba junto a los detectives Fagalde y Acevedo. El tribunal le exhibe fotografías de fojas 327 y 328, identificando en ellas al Teniente Medina que refiere en sus dichos, a quien describe como un hombre macizo, alto y medio trigueño. Al ser careado don Marcos Pezoa Salfate con el encausado Luis Medina Aldea, manifestó el primero de los anteriores que, la persona con quien se le carea fue quien le expuso en la Fiscalía Militar que estaban en guerra, y que además él pudo presenciar los golpes a los cuales Acevedo lo estaba sometiendo, ratificando todos sus dichos.

9.- Declaraciones de don Orlando Martín Moraga Fuentealba, de fojas 642 y 1043, quien señaló que fue detenido en el año 1973, trasladado al cuartel de Caletones y al día siguiente hasta la cárcel de Rancagua,



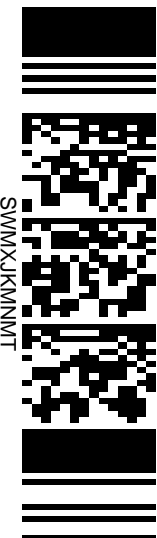
donde estuvo privado de libertad durante un año y un mes. Relata que fue a declarar dos veces a la Fiscalía de Rancagua, la que se encontraba al interior de la Intendencia, en la plaza de armas de Rancagua. Expuso que en los interrogatorios participaban tres personas y entre ellas, el Teniente Luis Medina, quien se hizo famoso en la cárcel, dado que todos los presos políticos lo sindicaban como el militar que torturaba en la Intendencia. Precisa que todos los interrogatorios consistían en golpes de puños, patadas y con un "tonto de goma", además de continuas amenazas de muerte. Agrega que Medina era el que principalmente golpeaba, y cuando salía seguían golpeando "los tiras", pero eran más medidos en su trato. Recuerda que solo en una oportunidad le vendaron la vista, es por ello que pudo reconocer a quienes lo flagelaron. Indica que la mayoría de los presos políticos que llegaban a la cárcel, lo hacían con evidentes signos de haber sido torturados, algunos con marcas de quemaduras de cigarrillo en el pecho, estómago y brazo; apenas se podían mover o caminar y todos decían que habían sido flagelados en la Intendencia por Medina y los dos funcionarios de Investigaciones. Expresó que entre quienes estuvieron detenidos en la cárcel de Rancagua se encontraron Marcos Pezoa, Alfonso Araya, a quien amenazaban siempre con que lo iban a fusilar, a Nolberto Henríquez, a los hermanos Quintana, Carlos Leyton Sánchez, Carlos Lira Moscoso y a Adolfo Lara Bustamante, al que había que recoger todas las noches, porque si caía detenido alguien del Partido Socialista, siempre nombraban a Lara. También recordó que vio varios menores de edad detenidos, entre ellos su sobrino Juan Carlos Valladares Moraga. Al ser careado don Orlando Moraga Fuentealba con Luis Medina Aldea, manifiesta el primero de los anteriores que, no reconoce a la persona que tiene a su lado, dado que han pasado muchos años, no obstante, ratifica sus dichos, en cuanto expuso haber sido interrogado y torturado en dos ocasiones en la Fiscalía Militar por el Teniente del Ejército Luis Medina, quien lo golpeó en la boca con un palo, y por dos funcionarios de Investigaciones, Fagalde y Acevedo.

10.- Declaración de doña María Luisa Gutiérrez Catalán de fojas 658, quien manifestó que el día 14 o 15 de septiembre de 1973 fue detenida. Expresa que, encontrándose detenida en la cárcel, militares la trasladaron hasta la Fiscalía Militar, donde fue interrogada por Medina. Aclara que, en su primer interrogatorio no estuvo vendada por lo que pudo reconocerle, la golpearon mucho en el estómago, la quemaron con cigarros y producto de



esas agresiones perdió la dentadura. Indicó que unos días después Medina la fue a buscar a la cárcel y le dijo que irían de paseo, la llevaron por segunda vez a la Fiscalía y el interrogatorio fue más duro, le aplicaron corriente en la boca y en la vagina, le tocaron sus genitales y la violaron. Reconoció en el lugar, la voz de Medina. Expone que en esa ocasión las torturas fueron tan brutales que perdió el conocimiento, despertando en el interior de la cárcel. Agrega que a la Fiscalía Militar fue llevada en dos oportunidades más, donde le aplicaron corriente en sus manos y boca, además de vendarla y golpearla, encontrándose también presente Medina. Recuerda que Medina era alto, pelo oscuro, tez morena, a quien reconoció en la fotografía que se le exhibe y que obra a fojas 328, quien la interrogó y torturó en la Fiscalía Militar, y que a lo menos presencié las tocaciones en sus genitales y violación a la que fue sometida.

11.- Declaraciones de don Manuel Jesús Lara Bustamante de fojas 7, 739 y 1035, quien manifestó que fue detenido el día 30 de septiembre de 1973, recuperando su libertad a fines del año 1975. El día 30 de septiembre fue llevado por tres patrullas de Carabineros al retén San Pedro, ubicado en calle Cachapoal de Rancagua donde fue interrogado. Al día siguiente lo trasladaron a la cárcel de Rancagua y desde ese recinto fue llevado por militares de día o de noche en varias oportunidades tanto al Regimiento de la ciudad como a la Fiscalía Militar, ubicada en la Intendencia, lugares en los que siempre estuvieron presentes los funcionarios de investigaciones Acevedo y Fagalde, y el Teniente Luis Medina. Agrega que el Teniente Medina daba las órdenes y también participó de los golpes que recibió y lo torturó en la cárcel de Rancagua. Al ser careado don Manuel Lara Bustamante con el acusado Luis Medina Aldea, el primero ratificó sus dichos y rememoró un episodio ocurrido el día 12 de diciembre de 1973, en el Regimiento, lugar al que fue llevado por funcionarios de investigaciones, junto a Jaime Jaqui, siendo recibido por Medina quien lo golpeó con un elemento tipo "churro" principalmente en la cabeza, donde además estaba presente Acevedo y Fagalde, instancia en que se le aplicó corriente. Posteriormente, expresó que fue llevado a la Fiscalía Militar, en al menos dos ocasiones, donde el Teniente Medina lo interrogó y golpeó en sus riñones, porque la cabeza la tenía mala, agregando que éste le señaló que lo torturaría hasta que el médico dijera no más. Agrega que luego de su detención y traslado a la cárcel, lo llevaron hasta la Fiscalía Militar, allí el Teniente Medina manifestó que en ese lugar no podían interrogar y



SMMXJKNMNT

golpear, de modo que lo trasladaron hasta el Regimiento, siendo torturado en el taller de carpintería. Además de ello, señaló que la persona con quien se le careaba fue quien lo interrogó y torturó en más de una ocasión en la Fiscalía Militar y en el taller de carpintería del Regimiento, añadiendo que no estuvo vendado y que eso lo hacían cuando terminaban los flagelos. Refiere que, durante su detención pasó la mayor parte del tiempo en la enfermería de la cárcel, y que producto de ello en Dinamarca le detectaron cinco fracturas de cráneo y otras lesiones. Señaló no haber visto otras personas distintas de Acevedo, Fagalde y Medina en las sesiones de tortura, sin embargo, en una oportunidad, mientras esperaban ingresar a la sala de la Fiscalía Militar advirtió la presencia de un boina negra de apellido Molina que era Capitán, quien apagaba los cigarros que fumaba en la lengua de algún detenido. Al respecto corresponde anotar que, claramente este deponente diferencia al Capitán Molina del Teniente Medina, atribuyéndole distintas conductas a uno y otro.

12.- Declaraciones de don Alfonso Araya Salinas de fojas 807 y 1037, quien relató que desde el 11 de septiembre de 1973 estuvo detenido en la cárcel de Rancagua y que el día 15 ó 16 de septiembre del referido año fueron sacados en horas de la madrugada por personal militar a cargo del Teniente Medina y trasladado hasta las cercanías de su casa en la población Patria Joven, por cuanto era acusado de tener armamento escondido. El día 23 de septiembre de 1973 fue llevado junto a otros detenidos a una oficina interior de la cárcel donde estaba el Teniente Medina, un funcionario de la aviación de apellido Soto, otro de la marina y un representante de Carabineros. Preciso que en ese lugar fue interrogado acerca de unas metralletas y al responder negativamente, el Teniente Medina ordenó que lo amarraran a la silla y lo golpeó brutalmente en la cara, producto de lo cual perdió varias piezas dentales. Después de ese episodio vio a Medina en otras ocasiones en la misma oficina de la Cárcel, pero no lo golpeó nuevamente. En diligencia de careo realizada entre el acusado Luis Medina Aldea y don Alfonso Araya Salinas, este último ratificó sus dichos, reconociendo al primero como el Teniente Medina al que se refiere en sus dichos, quien es la persona que lo interrogó al interior de la cárcel.

13.- Declaraciones de don Joel Antonio Quintana García de fojas 810 y 1045, quien señaló que desde el 25 de septiembre de 1973 hasta el 16 de enero de 1976 estuvo detenido en la cárcel de Rancagua. Al ser aprehendido lo subieron a un vehículo y lo obligaron a señalar los



domicilios de sus hermanos Pedro y David, a quienes también detuvieron. Indica que fueron trasladados al Cuartel de Investigaciones donde estaba el Teniente del Ejército de apellido Medina, quien era maceteado y alto, el que dio la orden que debían ser trasladados a la Intendencia para ser interrogados. Recuerda que en ese lugar lo ingresaron a una sala y al parecer Acevedo tomaba notas. Le preguntaron por armas, y al no responder satisfactoriamente, lo golpearon con una especie de "churro", un bate corto que en un extremo tenía una correa que era de caucho o goma. Añadió que además le daban golpes de pies y puños y al tiempo en que terminó su interrogatorio apareció Medina y preguntó *"cómo iba la cosa"*. Luego de ese episodio lo trasladaron a la cárcel. Expresó que en Rancagua estuvo detenido con Adolfo Lara Bustamante, a quien le dieron muy duro, lo sacaban a distintas horas para interrogarlo y torturarlo. Preciso que Medina se ensañó con Lara. Recuerda también a otros detenidos, entre los que menciona a Alfredo Martínez Córdoba, Marcos Pezoa, Guillermo Salinas y otros. Asimismo, pudo ver en la cárcel a menores de edad, en calidad de detenidos también por temas políticos. En diligencia de careo realizada entre don Joel Quintana García y Luis Medina Aldea, el primero expuso que ratificaba sus dichos, y además reconoce a la persona con la que se le carea como el Teniente Medina, quien lo recibió en el Cuartel de Investigaciones, al momento en que fue detenido y además ordenó que lo llevaran junto a sus hermanos hasta la Intendencia.

14.- Declaraciones de don David Eleuterio Quintana García de fojas 813 y 1047, quien señaló que el 24 de septiembre de 1973 fue detenido, en horas de la noche junto a sus hermanos Joel y Pedro, por funcionarios de Investigaciones de apellidos Fagalde y Acevedo, más un conductor. Indicó que una vez que fueron detenidos se les trasladó hasta el Cuartel de Investigaciones donde los recibió el Teniente Medina, quien lo interrogó en presencia de Acevedo y Fagalde, además de dar las órdenes. Expresó que, en esa oportunidad, le aplicaron electricidad en el ano, testículos, tetillas y lengua entre otros, en una parrilla. También lo golpeaban con golpes de puño en distintas partes del cuerpo, y con un atizador de metal, como una plancha metálica en la planta de los pies, lo que le ha provocado secuelas para caminar. Refiere que luego de ese episodio, fueron trasladados hasta la Intendencia donde les tomaron declaraciones siendo inculcados por la formación de una escuela de guerrillas. En esa oportunidad, refiere que también fue torturado, encontrándose presente Fagalde, Acevedo y Medina.



Añade que estuvo detenido por más de tres años y durante 45 días fue torturado. Manifestó que sus torturadores fueron Acevedo, Aravena, Fagalde, el Teniente Medina, el coño Molina, este último famoso por apagar las colillas de cigarros en los cuerpos de los detenidos, quien era moreno, de pelo crespo, rudo, muy bruto. Agregó que además estaba el Capitán Andreotti, a quien le gustaba aplicar torturas más bien psicológicas y la técnica de "el teléfono" al igual que a Medina. En diligencia de careo realizada entre don David Quintana García y Luis Medina Aldea, el primero ratificó sus atestados, reconociendo a la persona con quien se le carea como el Teniente Medina, quien lo recibió al tiempo en que se le ingresó detenido al Cuartel de Investigaciones, lugar donde fue torturado con descargas eléctricas. Añadió que Fagalde, Acevedo y Medina lo interrogaron y torturaron brutalmente. Asimismo, expresa que durante su detención fue llevado en distintas oportunidades a la Fiscalía Militar, donde fue interrogado y torturado por los mismos funcionarios, quienes lo golpeaban con un *"tonto de goma"*, con una cadena, puños, pies y el famoso atizador con el que le destrozaron los pies. Recuerda que además vio a Medina varias veces en la cárcel.

15.- Declaraciones de don Adolfo Ernesto Lara Bustamante de fojas 830 y 1041, quien manifestó que el día 17 de septiembre de 1973 fue detenido y el primer día, lo trasladaron hasta el Regimiento de la ciudad donde sufrió sus primeros flagelos, dado que fue golpeado con la culata de los fusiles y sometido a simulacros de fusilamiento. Luego lo llevaron a una sala donde lo interrogaron y el detective Aravena le tomó una declaración. En horas de la noche fue enviado a la cárcel de Rancagua, en la que permaneció hasta comienzos del año 1975, para luego ser trasladado a la cárcel de Talca. Durante su permanencia en la cárcel de Rancagua lo sacaron en varias oportunidades a declarar, principalmente a la Fiscalía Militar donde fue torturado brutalmente, pero también fue interrogado en el Regimiento de la ciudad, en el Cuartel de Investigaciones y en la propia cárcel, en la oficina del Alcaide, quien autorizó a Medina y sus colaboradores para ocuparla, lo que ocurrió antes de su traslado a Talca. Recordó que fue llevado a la Fiscalía unas veinte veces, donde siempre fue flagelado, salvo una vez. Preciso que una patrulla militar encabezada por el Teniente Medina lo iba a buscar a la cárcel o bien lo trasladaba el enlace de la cárcel con los militares, el cabo Manuel Lara de Carabineros. Explicó que, encontrándose en la Fiscalía, lo ingresaban en distintas salas, y casi

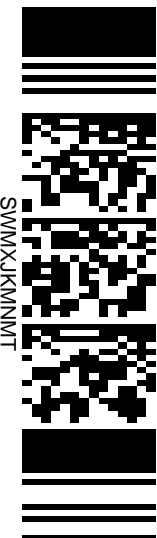


siempre los funcionarios Acevedo y Fagalde lo vendaban para interrogarlo y torturarlo, lo golpeaban con un *"tonto de goma"*, con golpes de pies y puños y además le aplicaban descargas eléctricas, en partes sensibles de su cuerpo, como cabeza, testículos y tetillas aunado a que también fue quemado con cigarros en sus piernas, cicatrices que aún tiene. Puntualizó que Medina daba golpes, con la particularidad que le gustaba que lo vieran por lo que no le vendaban la vista, además rememora que le decía que lo mirara, que era el Teniente Medina Aldea, y que había hecho cursos de inteligencia en muchos países, como Brasil, además que había estado en la Escuela de Las Américas, por lo que no tenía que hacerse el duro, y debía hablar. Manifestó que Medina le preguntaba por armas, por sus bienes personales y por dinero. Expresó que, en otras ocasiones, lo interrogaban juntos los detectives y Medina. Luego de los interrogatorios lo enviaban a la cárcel, en algunas ocasiones llegaba directo a la enfermería, al igual que su hermano Manuel, quien pasó casi un año y medio en ese lugar. Expuso que, en al menos cinco oportunidades, lo sacaron solo para ser torturado, sin que le preguntaran nada. Recordó que Medina era alto, corpulento, maceteado, reconociéndolo en fotografías de fojas 327 y 328, que el tribunal le exhibe. Detalla que Medina utilizó guantes de cuero negro para interrogarlo y torturarlo. Afirmó que al menos en dos oportunidades, lo aturdió con golpes en la cabeza, dado que era bruto para interrogar, pero no tan inteligente para obtener información. Agrega que Medina, lo interrogó en el subterráneo del Cuartel de Investigaciones, unas cuatro veces. Además, lo hizo presenciar en la Intendencia las torturas de Luis Mariño y Carmen Arisoleaga. Al ser consultado, si tiene antecedentes respecto de que Medina violara o abusara sexualmente a mujeres detenidas, señala que supo que *"se hacía el lindo"* con una mujer que estaba detenida en el Buen Pastor, que se encargó que saliera en libertad y que después se les vio juntos en la calle. Recuerda que vio a Arturo Droguett en la cárcel, a quien reconoce en la fotografía de fojas 371, indicando que conoce su caso porque fue de los menores que detuvieron en la población Esperanza, donde había un núcleo socialista dirigido por su hermano Manuel Lara. En diligencia de careo realizada entre don Adolfo Lara Bustamante y el acusado Luis Medina Aldea, el primero ratificó sus dichos, reiterando que en varias ocasiones desde su detención fue sacado desde la cárcel y trasladado hasta la Fiscalía Militar donde fue torturado por los funcionarios de investigaciones y por el Teniente Luis Medina. No tiene dudas que la



persona con quien se le carea es el Teniente Medina, quien lo torturó con los funcionarios de investigaciones tanto en dependencias del Cuartel de Investigaciones, en la cárcel y en la Fiscalía Militar.

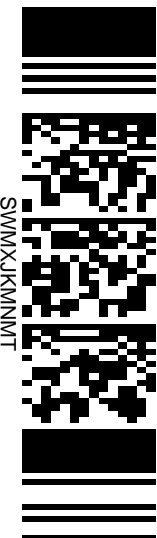
16.- Declaraciones de don Alfredo Antonio Martínez Córdova de fojas 980 y 1039, quien expuso que estuvo detenido en la cárcel de Rancagua desde el 4 de octubre de 1973 hasta el 4 de diciembre de 1975. Puntualizó que una vez que lo detuvieron lo condujeron hasta la Fiscalía Militar y lo llevaron hasta la oficina del Teniente de Ejército Luis Medina, quien lo recibió. Afirma que alrededor del mediodía del 5 de octubre de 1973, lo ingresaron a la sala de interrogatorio, oportunidad en que Medina le pidió a Acevedo y Fagalde que lo prepararan, para lo cual le esposaron las manos detrás de la espalda y le amarraron los pies con una soga. Agregó que encontrándose de pie lo encapucharon con una bolsa de género negro, cuyo objetivo era amedrentarlo más, ya que no sabía lo que ocurría a su alrededor. Agregó que fue golpeado con elementos contundentes, un *"tonto de goma"* y una varilla de bronce. Relató que recibió golpes de pies y puños y dada la brutalidad usada en su contra cayó al piso y estando allí le aplicaron descargas eléctricas en las palmas de los pies y en los testículos en menor medida. Preciso que por la nariz le introdujeron un químico, que era como pimienta, lo que lo desesperó porque no podía respirar. Le preguntaban por armas, por el Plan Z, por una escuela de guerrillas y por nombres de compañeros. Indicó que para finalizar el interrogatorio lo pusieron de rodillas frente al escritorio y le sacaron la capucha, instancia en que Medina lo apuntó con un arma en la sien. Luego lo sacaron de la sala y lo llevaron a otra pieza donde había más detenidos. En ese lugar se desvaneció, por lo que Medina lo llevó al Hospital Regional, donde lo atendió un médico de apellido Flores, quien señaló que debía permanecer hospitalizado pero otro doctor dijo que no, dado que el encausado ejercía presión para que eso no ocurriera, por lo que luego lo llevó a la cárcel. En este lugar lo dejaron en una enfermería provisoria donde estuvo casi dos meses recuperándose, tras lo cual fue nuevamente citado a la Fiscalía a declarar, siendo interrogado por Fagalde y Acevedo donde no hubo golpes. Recuerda que Medina era alto, delgado, de tez clara, reconociendo en la fotografía de fojas 328, a la persona que sindicó como el Teniente Medina, el que corresponde a Luis Medina Aldea. En diligencia de careo realizada entre el encartado Luis Medina Aldea y don Alfredo Martínez Córdova, este último señaló que la persona con quien se le carea es el Teniente



Medina, a quien se ha referido en sus declaraciones, la que además ratifica, expresando que fue quien lo torturó brutalmente en la Fiscalía Militar.

17.- Declaraciones de Óscar Segundo Ibáñez Zapata de fojas 722, 730 y 754; de Sergio Ramírez Mena, de fojas 721; de Nelson Eduardo Pérez Sánchez, de fojas 715, 718, 719, 721 y 760, y de José Aníbal Cerda Vargas, de fojas 758, quienes se encuentran contestes en señalar que pertenecieron a partir del año 1970 en adelante a Carabineros de Chile, prestando servicios en la ciudad de Rancagua en distintos grupos. Expusieron que en el mes de octubre o noviembre de 1973 se creó en Rancagua el CIRE, Servicio de Inteligencia Regional, al que dicen haber pertenecido, y que fue creado por el Teniente Coronel de Ejército e Intendente Regional, Christian Ackerknecht San Martín. Expresaron que el CIRE además lo componían varios militares, entre ellos el Teniente Medina, quien estaba a cargo del servicio e impartía las órdenes, Alcántara, Tripayán, *"el cara de palta"*, y otros que no recuerdan, también personal de investigaciones, Acevedo y Fagalde, y personal de Carabineros, López Apablaza y otros. Las instrucciones dadas al CIRE desde el Regimiento o la Intendencia -en su mayoría-, decían relación con buscar a los extremistas, para lo cual se les entregaba una lista con los nombres de los más buscados, les hacían seguimientos y proporcionaban la información al Regimiento, quienes practicaban las detenciones y luego eran entregados a investigaciones para que realizaran la parte de inteligencia, esto es, los interrogatorios y derivaciones a centros de detenciones. Expresaron que las novedades se las daban siempre al Teniente Medina o al Suboficial Alcántara en la Intendencia. Por su parte, don Nelson Pérez Sánchez añadió que el CIRE funcionaba en la Intendencia Regional, estaba en una oficina al fondo del primer piso y reitera que el jefe era el Teniente Medina quien impartía las órdenes. Agrega que además había otra oficina donde trabajaban Acevedo y Fagalde, funcionarios de Investigaciones que trabajaban para el CIRE. A mayor abundamiento, señaló que los detenidos eran entregados al Teniente Medina en la Intendencia, desconociendo lo que ocurría con ellos.

18.- Declaraciones de don Manuel Segundo Lara Duarte, de fojas 307, quien en lo pertinente señaló haber pertenecido para el año 1973 a Carabineros de Chile, en particular, desde el 12 de septiembre y hasta el mes de diciembre de ese año estuvo agregado a la Fiscalía Militar, trabajando directamente con el fiscal Christian Ackerknecht San Martín, siendo su función recibir la documentación que enviaban las distintas



unidades y hacerla llegar a aquél. También recibía los listados que el Fiscal le entregaba para ir a buscar detenidos a la cárcel de Rancagua. Al llegar a la Intendencia, dejaba a los detenidos en un salón grande y le daba cuenta al Fiscal. Posteriormente los encargados de los interrogatorios iban a buscar a los detenidos, entre ellos estaban el Teniente de Ejército Medina y dos funcionarios de investigaciones, Aravena y Acevedo. Sostuvo que los detenidos cuando eran retirados desde la cárcel lo hacían en buenas condiciones físicas, pero al salir éstas eran malas, dado que muchas veces se veían golpeados y machucados. Afirmó que, aunque no presencié los interrogatorios, sí vio a los detenidos, presumiendo que deben haber sido torturados. Recuerda a los detenidos Albino Reyes, Manuel Lara y Adolfo Lara. Precisó que le llamó la atención Manuel Lara porque tenían el mismo nombre, quien incluso debió aprender a caminar de nuevo de lo mal que salió, pero indica que no los volvió a ver.

19.- Declaraciones de don Aliro Felipe Eduardo Berrios Moscoso, de fojas 714; de don Gabriel Manuel Fuentes Latorre, de fojas 711; de don Ovidio Leandro Jaque Andaur, de fojas 709, 728, 1001 y 1323; de don Guillermo Manuel Berrios Pallamar, de fojas 695, 744 y 995; de don Guilo Enrique Alcántara Muñoz, de fojas 696 y 762; de don Francisco Javier Cuadra Valenzuela, de fojas 697 y 1024; de don Luis Guillermo Soto Ovalle, de fojas 699; de don Miguel Ángel Lazcano Montenegro, de fojas 732; de don Luis Humberto Reyes Jerez, de fojas 746; de don Víctor Antonio Núñez Fernandez, de fojas 749; de doña Bernabé de la Cruz Droguett Ávila, de fojas 750; de don Luis Rubén Díaz Núñez, de fojas 752; de don Marcelino Segundo Tripayán Coccio, de fojas 767; y de don Guillermo Arturo Torrealba Wahl, de fojas 998; quienes en lo pertinente fueron contestes en señalar que, pertenecieron en el año 1973 al Ejército de Chile, agregados al Regimiento de Infantería N° 22 Lautaro de la ciudad de Rancagua, ocupando distintos grados. En distintas ocasiones, y de acuerdo a sus grados, les correspondió realizar patrullajes de control de toque de queda, conducir los vehículos del Regimiento, custodiar detenidos en el Regimiento o Intendencia, u otras funciones análogas. Indicaron que con ocasión del 11 de septiembre de 1973 llegaron al regimiento unidades de Coyhaique y Valparaíso. Recuerdan que estaba a cargo de la Guarnición de Rancagua el Comandante Christian Ackerknecht San Martín, los superiores eran el Capitán Enriotti y el Teniente Medina, siendo este último quien



estuvo trabajando en la Intendencia. Recordaron algunos que en la Intendencia se interrogaba a los detenidos.

20.- Declaraciones de don Héctor Enrique Castillo Yáñez de fojas 196; de don Rodolfo Moraga Alvarado de fojas 197; de doña Marta Doris Aguirre Bermúdez de fojas 198; de don Pedro Ferrada Poblete de fojas 199 y 408; de don Orlando Patricio Bravo Bravo de fojas 200; de don Exequiel Toro Toro de fojas 217 y 406; de don Rafael Roberto Muñoz Sagredo de fojas 227; de don Héctor Fernando Sepúlveda Maureira de fojas 229; de don José Pascual Muñoz Díaz de fojas 230; de doña María Soledad Tapia Poblete de fojas 231; de don Luis Olguín Hormazábal de fojas 233; de don Carlos Alberto Valdebenito Castro de fojas 236; de don Luis Benito Lineros Hermosilla de fojas 239; de don Julio Arturo Gasca Urzúa de fojas 260; de don Héctor Alejandro Molina Alarcón de fojas 267; de don Carlos Buenaventura Cornejo Vergara de fojas 333; de don Pedro David Retamal Solorza de fojas 335; de don Vicente Alfonso Quijada Contreras de fojas 431 y 710; de don Jaime Enrique Canto Valdebenito de fojas 640; de don Mario Alejandro Covarrubias Ramírez de fojas 672; y de don José Máximo Guerra Quiroz de fojas 912; todos quienes estuvieron contestes en señalar que para el año 1973, 1974, 1975 y 1976, formaban parte de Gendarmería de Chile, cumpliendo distintas funciones en la cárcel de Rancagua durante los períodos que permanecieron en esta unidad. Algunos de ellos expresaron que, vieron detenidos en mal estado, que se quejaban de dolor, llegaban así desde la fiscalía, con el pelo o barba cortada u hombros dislocados, y otros manifestaron haber visto todo normal. El testigo Covarrubias depuso respecto a las condiciones físicas de los detenidos que se enteró por comentarios de los propios funcionarios de gendarmería que con algunos aprehendidos el trato no era bueno, incluso recuerda que el detenido Manuel Lara Bustamante fue sometido a flagelos, quien ingresó al penal en buenas condiciones y salió en sillas de ruedas. Añade el testigo Covarrubias que los funcionarios y detenidos decían que Medina era duro en los interrogatorios y que ponía la mano firme, recordando que los detenidos señalaban *"vamos a la fiscalía"*. El testigo Retamal y Ferrada, contestes con sus colegas, refirieron además que en reiteradas oportunidades le correspondió ir a dejar y a retirar detenidos a la fiscalía en un bus de gendarmería, luego, para ir a buscarlos iba caminando, y los funcionarios de investigaciones, Aravena Sepúlveda y Acevedo, en una camioneta del CORA, los llevaba de regreso a la cárcel. En una oportunidad,



manifestaron que a fines de 1973 les correspondió retirar detenidos de la Gobernación, entraron a una sala y dos detenidos estaban con una capucha, como saco de harina en su cabeza, golpeados y en muy mal estado, les costaba caminar, un poco inconscientes, por lo que se les dificultó llevarlos de regreso. Los subieron a la camioneta y unas alumnas del liceo de niñas los vieron en ese estado, por lo que denunciaron el hecho. En la tarde, según señala Retamal, fueron citados por el Teniente Medina a la Fiscalía quien los reprimió fuertemente por no respetar el protocolo de traslado de detenidos, por lo que desde ese momento dejaron de hacer traslados, los que fueron efectuados por personal militar o de investigaciones. Además, el testigo Retamal recordó haber visto en malas condiciones físicas a un detenido político de apellido Lara, quien al parecer era dirigente de Codelco. Agregó que supo que lo golpearon tanto, que tuvo lesiones en el oído medio y que no podía caminar. Mencionó que había varias personas golpeadas en la enfermería. Por su parte, el testigo Exequiel Toro añadió que el Teniente Medina iba al presidio de Rancagua a buscar detenidos, asimismo, a fojas 12 reconoce en la dotación de personal de investigaciones a Fagalde, Aravena Sepúlveda, Acevedo Villalobos y a Ferruz, quienes entre otras funciones cumplían con los traslados de detenidos. Por su parte, el testigo Quijada recordó bien al Teniente Medina, a quien conoció cuando asistía a la unidad, el que, estaba a cargo de las patrullas que iban a buscar y a dejar detenidos, era alto y siempre vestía de instrucción. El testigo Covarrubias además expuso que, el Teniente Medina iba al menos dos veces al mes a la cárcel con los funcionarios de investigaciones Jorge Fagalde, José Aravena y Hugo Acevedo, reuniéndose con el Alcaide o con los oficiales, reconociendo en las fotografías de fojas 237 y 328, que le fue exhibida, a la persona a quien ha hecho mención.

21.- Declaraciones de don Patricio Ávila Neira de fojas 256 y 356, quien, en lo pertinente, manifestó haber pertenecido a Gendarmería de Chile, siendo destinado en el mes de abril del año 1974 a la cárcel de Rancagua, cumpliendo funciones administrativas en la institución. Recuerda que los detenidos al llegar de la Fiscalía Militar ingresaban afectados de forma psicológica, y sindicaban a un teniente de apellido Medina como la persona que los interrogaba duramente. Sin embargo, por comentarios de funcionarios supo que en los interrogatorios que se realizaban en la Fiscalía Militar, los detenidos eran maltratados, golpeados y electrocutados. Señaló no haber conocido al Teniente Medina, pero si haber escuchado por parte



del personal de Gendarmería y de los mismos presos políticos que en la Fiscalía se interrogaba de manera muy dura, por cuanto usaba elementos de presión, tales como amenazas, intimidaciones con armas, golpes, entre otros.

22.- Declaraciones de don Patricio Rodolfo Javier Núñez Oliveira de fojas 269, 356, 358 y 1438, quien señaló ser médico cirujano de profesión, y haber prestado servicios en el Hospital de Rancagua, y desde el año 1970 a mediados de 1975 también en la Cárcel de Rancagua, en horario de 12 a 14 horas. Refiere que atendió a muchos presos políticos que estaban en malas condiciones o torturados. Preciso que hubo un detenido que llegó en pésimas condiciones, pero no está seguro si era de apellido Lara, quien estaba sordo por los golpes y tenía fracturado el tímpano y el cráneo, con pérdida de equilibrio. Preciso que por ese detenido recibió una llamada del propio Intendente, C. Ackerknecht San Martín, quien quería saber si de verdad estaba mal o se estaba haciendo. Afirmó que algunos de los presos políticos presentaban quemaduras eléctricas y de cigarrillos, contusiones, hematomas, lesiones con exposiciones óseas, heridas contuso cortantes y que además había detenidos que le contaban que los hacían meter la cabeza a un balde con orina. Adujo que, todos los detenidos torturados señalaban al Teniente Medina como su verdugo. Añade que lo vio en una oportunidad en que fue a dejar un detenido y a llevarse otros. En ese momento el Teniente Medina le preguntó si podía llevarse a un detenido que estaba en la enfermería en muy malas condiciones al interrogatorio, a lo que le indicó que sería bajo su responsabilidad. En diligencia de careo efectuada entre el testigo Núñez Oliveira y el acusado Luis Medina Aldea, el primero expuso no reconocerlo, reiterando el episodio que relató con el señor de apellido Medina, agregando que el practicante le informó que el Teniente Medina iba a retirar un detenido para llevarlo a la Fiscalía. Posteriormente, señaló que la persona que sacó al detenido era moreno, pelo negro, de bigote, de aproximadamente 1.70, y que dista mucho de la persona con quien fue careado, quien no corresponde al Teniente Medina que le fue presentado en la cárcel. Además, mencionó haber atendido a fines de 1973 a menores de edad en la enfermería, detenidos de índole política, y uno de ellos, uno de 16 años de edad, le comentó que lo estaban interrogando acerca del paradero de su tío o papá, pero él estaba bastante golpeado.

23.- Declaraciones de don Carlos Mario Lira Moscoso de fojas 305 y 330, quien manifestó haber sido Alcaide de la cárcel de Rancagua hasta el 11 de septiembre de 1973, siendo detenido con posterioridad por orden de



Cristian Ackerknecht, permaneciendo recluido en ese recinto, por el hecho de haber sido nombrado por el Gobierno del señor Allende. Añade que fue interrogado en el Cuartel de Investigaciones y en la Intendencia por el Teniente Medina y los detectives Fagalde, Acevedo, en octubre de 1973. Refiere que el Teniente Medina lo agredió física y psicológicamente encontrándose con su vista vendada. Recuerda que usaba una subametralladora uzi parabellum, que había sido de cargo del testigo, quien también andaba con granadas manuales y una pistola. Se decía que él era un torturador, quien tomaba los interrogatorios en la Intendencia o en el Regimiento, iba por las tardes o las noches a buscar a los detenidos a la cárcel. Luego, aclaró no haber sido golpeado en ninguna ocasión por el Teniente Medina y que sólo recibió maltrato psicológico, al igual que su señora. Reconoce a fojas 327 al Teniente Medina, no obstante, no está seguro si la fotografía de fojas 328 que, también se le exhibe corresponde al antes referido.

24.- Declaración de Ricardo Pontigo Varela de fojas 364, quien declaró haber sido detenido en diciembre de 1973, llevado al Cuartel de Investigaciones, a la Intendencia y a la cárcel, y desde ésta, enviado en diferentes ocasiones a la Intendencia a objeto de ser interrogado, en el primer piso, en una oficina ubicada al fondo. Mencionó entre sus interrogadores a Acevedo, Fagalde y el Teniente Medina. Recuerda que durante su permanencia en la cárcel vio detenidos a los hermanos Quintana, a Carlos Lira Moscoso, al flaco Lara, Manuel Lara Bustamante, a quien habían golpeado mucho.

25.- Declaraciones de doña Blanca Elena Droguett, de fojas 382 y 1345, quien expuso que para el año 1973 militaba en el Partido Socialista, y un día viernes del mes de noviembre o diciembre de ese año algunos de sus familiares fueron detenidos, entre ellos su sobrino Arturo Mariano Droguett Madrid, sus hermanos Marco Saúl y Carlos Arturo Droguett Ulloa. Agregó que fue hasta la cárcel de Rancagua a ver a sus familiares, oportunidad en que pudo conversar con Manuel Lara, a quien habían golpeado brutalmente. Además, se enteró que su sobrino y hermano Carlos sufrieron en la Fiscalía graves torturas en sus interrogatorios, dado que les aplicaron descargas eléctricas, los golpearon mucho, no les daban comida ni agua. Desconociendo quienes son las personas que los interrogaron y golpearon. Señaló que sus hermanos y sobrinos le dijeron que Medina los había torturado y que era como *"un perro para interrogar"*, quien era alto y



medio trigueño, reconociendo su fotografía a fojas 327 y 328. Aseveró que con el pasar del tiempo tomó conocimiento que Victoria Bustamante Valdebenito fue quien entregó los nombres de sus familiares. Agregó que junto a sus hermanos y sobrinos también estuvieron detenidos Francisco Ramón Abarca Moreno, Luis Alfonso Pérez Moreno y Juan Carlos Pérez Muñoz, todos quienes también eran de la Población Esperanza. En diligencia de careo realizada entre doña Blanca Droguett y Luis Medina Aldea, la testigo señala no reconocer a la persona con quien se le carea, indicando que, sin perjuicio de lo anterior, ratifica sus dichos.

26.- Declaración de don Julio Fernando Gómez Varela, de fojas 734, quien señaló haber sido detenido por personal de investigaciones, y llevado en varias ocasiones a la Intendencia pero no a interrogatorio. Recuerda que estando en la intendencia vio como los detectives Fagalde y Acevedo interrogaban de manera brutal a Daniel Mondaca y a Adolfo Lara, con quien compartió celda en la cárcel de Rancagua. Asimismo, recuerda que otros detenidos llegaban en muy malas condiciones a la cárcel luego de haber sido interrogados en la intendencia, donde participaban Fagalde, Acevedo y el Teniente Luis Alberto Medina Aldea. Expresó que encontrándose en la cárcel también vio al Teniente Medina quien escogía al azar quienes quedaban en libre plática o incomunicados.

27.- Declaración de don Renato Astrosa Sotomayor de fojas 693, quien en lo pertinente expuso que, en el mes de octubre de 1973, se desempeñó como asesor jurídico del Fiscal Militar de la época. Añadió que, el Teniente Luis Medina que tenía fama de malo y golpeador.

UNDÉCIMO: Que en consecuencia, las testimoniales rendidas por las propias víctimas, aunado a lo depuesto por los funcionarios de Gendarmería, del Ejército y Carabineros, permiten tener por cierto que, al interior de la Fiscalía Militar, se realizaron múltiples interrogatorios, imputándoles a Medina Aldea junto a otros dos sujetos -Fagalde y Acevedo-, apremios ilegítimos y vejámenes sexuales, circunstancias que por lo demás se encuentran corroboradas entre sí, otorgándole credibilidad a sus asertos, en cuanto a la sindicación que del encartado efectuaron algunos de ellos en las respectivas diligencias de careo, identificándolo todos de manera expresa con su nombre, grado y función dentro de la institución, además de las correspondientes características físicas, relacionadas estas últimas con el reconocimiento de las fotografías del encausado que en su oportunidad les fueron exhibidas, encontrándose por lo demás contestes en la forma en se



llevó a cabo la comisión de los respectivos ilícitos y los elementos o formas utilizadas para obtener dicho fin.

De esta forma, no serán oídas las alegaciones de absolución por falta de participación de la defensa de Molina Aldea, por cuanto se comparten, las reflexiones de los fundamentos del fallo de primer grado -en sus motivaciones cuarto a octavo, decimoquinto a decimoséptimo- desde que los elementos de convicción indicados en él, reúnen las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal y constituyen, por ende, un conjunto de presunciones judiciales que permiten tener por demostrada la participación del referido encartado, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Punitivo, haciéndose incluso cargo el sentenciador de la teoría alternativa consistente en la existencia de un error en la persona del condenado, la que por lo demás no fue acreditada por quien la sostuvo, aunado a que la prueba rendida durante el proceso resultó suficiente para arribar a su desestimación. Todo ello conforme a los presupuestos fácticos tenidos por ciertos en el considerando segundo -según se señaló-, teniendo especial consideración las funciones que Medina Aldea cumplió en la ejecución y condiciones en que se desarrollaron los interrogatorios, mientras se encontraron privados de libertad los afectados, en situaciones claramente, no ajustadas al Estado de Derecho.

Por su parte, resulta plausible considerar que la justificación que implicó que las víctimas o testigos que en las diligencias de careos no reconocieron al encausado, se debió al transcurso del tiempo, dado que en ese acontecer es esperable que se modifiquen las características físicas de las personas, siendo importante consignar que no obstante lo anterior, muchos de ellos, lo sindicaron en las fotografías exhibidas y en el conocimiento del nombre, función y grado que el encartado revistió.

En efecto, en los delitos dolosos la autoría supone la conducción final del acontecimiento típico por el autor, lo cual es una precondition del dominio del hecho. De esta forma, *“autor en general es aquel sin cuya intervención el hecho típico no puede siquiera principiar a ejecutarse o, aunque se ejecutara, no sería ya típico o sólo satisfaría las exigencias de un tipo penal diferente del que se trata en el caso concreto”*. En los delitos de dominio es autor quien cuenta con el *dominio del hecho*. Para determinar en quien concurre esa cualidad, hay que distinguir los casos en los cuales el sujeto domina el hecho porque domina inmediatamente la realización de la acción (*autoría de propia mano, autor ejecutor o autor directo*), de aquellos



en que lo domina porque domina la voluntad del que ejecuta la acción (*autoría mediata*) y de los que comparte tal dominio con otros, en conjunto (*co-dominio del hecho o dominio del hecho funcional o coautoría*) (Derecho Penal, Parte General, Enrique Cury Urzúa, Ediciones Universidad Católica de Chile, octava edición ampliada 2005, págs. 589 y siguientes)

En lo pertinente es *autor ejecutor, directo o de propia mano* aquel que realiza dolosamente y por sí mismo, la conducta descrita por el tipo. Por otro lado, *son coautores “quienes se han dividido la realización del hecho, en términos tales que disponen del condominio del hecho, cuya consumación deciden en conjunto, porque su contribución es funcional a la ejecución total”*, (Enrique Cury Urzúa, obra antes citada), tal como se advierte en la descripción de los presupuestos fácticos tenidos por ciertos en los considerandos séptimo a noveno de la sentencia recurrida.

DUODÉCIMO: Que no obstante lo razonado precedentemente, en el punto 4 del considerando segundo de la sentencia en alzada, se fija como hecho tenido por cierto que doña María Luisa Gutiérrez Catalán, además de las torturas sufrió de violencia sexual, situación que, si bien también es mencionada en el auto de procesamiento y en la acusación, como se lee a fojas 1.138 y 1.521, respectivamente.

Luego, a fojas 2573 y siguientes, por sentencia complementaria de 22 de diciembre de 2020, el Ministro Carroza, intercaló un considerando 2º Bis, en que, con el objeto de ajustar los hechos descritos a los contenidos en el auto acusatorio y su correlato, se refiere a las torturas y/o tormentos que sufrió doña María Luisa Gutiérrez Catalán y señala que, por su forma de realización, constituirían una forma específica de violencia contra la mujer. Luego, indica que se reconoce y visibiliza la violencia sexual perpetrada contra la afectada en el delito de tortura y como forma de garantizar y respetar los estándares internacionales del Sistema Universal e Interamericano de DD.HH., que abordan el problema de violencia contra la mujer desde una perspectiva de género. En la parte resolutive, rectifica la sentencia en el sentido que se condena al sentenciado por el delito de torturas y/o tormentos sólo respecto de las 12 víctimas hombres y de María Luisa Gutiérrez, condenándosele como autor de los delitos de torturas y/o tormentos con violencia sexual y mantiene lo señalado respecto de la víctima doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito. Asimismo, se condenó al sentenciado por el delito de torturas y/o tormentos y abusos deshonestos en la persona de doña María Luisa Gutiérrez.



En consecuencia, a pesar de haberse dictado la signada sentencia complementaria, no hubo modificación en cuanto a la pena -por cuanto, en definitiva, se le condenó por tres delitos y no dos como se había indicado en la sentencia original- y, en consecuencia, a pesar de haber apelado verbalmente el encartado, no existe perjuicio para él.

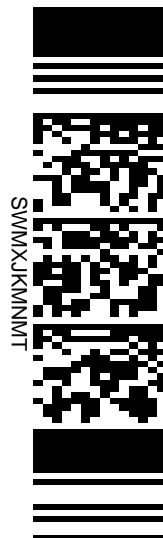
Al respecto es dable señalar que el artículo 424 en relación con lo previsto en el artículo 500 N° 3, 4 y 7, ambos del Código de Procedimiento Penal, contemplan una *congruencia o correlación entre el contenido de la acusación y el de la sentencia*. Es decir, impide que la persona pueda ser condenada por un “hecho” diferente al que ha sido individualizado y objeto de la acusación.

En efecto, la acusación circunscribe los hechos y la atribución de participación que se introducen al proceso, de manera de limitar absolutamente el contenido de la sentencia, la que no puede referirse a presupuestos fácticos o atribución de responsabilidad al encausado por aquellos que no fueron oportunamente objeto de imputación en el auto de procesamiento y en la acusación, circunstancia que evidentemente constituye una garantía constitucional del proceso penal. Es así como el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal prescribe que: *“Cuando, ejecutoriada la resolución que declara cerrado el sumario, el juez no encontrare mérito para decretar el sobreseimiento, dictará un auto motivado en el cual dejará testimonio de los hechos que constituyen el delito o los delitos que resultan haberse cometido y la participación que ha cabido en él o en cada uno de ellos, al procesado o a los procesados de la causa, con expresión de los medios de prueba que obran en el sumario para acreditar unos y otras. (...)”*. Por su parte, el artículo 448 del citado cuerpo legal establece que: *“En la contestación, el procesado expondrá con claridad los hechos, las circunstancias y las consideraciones que acrediten su inocencia o atenúen su culpabilidad.*

Podrá presentar una o más conclusiones con tal que sean compatibles entre sí o con tal que, si fueren incompatibles, las presente subsidiariamente, para el caso en que la sentencia deniegue la otra u otras.

La contestación de la acusación por el acusado constituye un trámite esencial que no puede darse por evacuado en su rebeldía ” (...)

Por último, en consonancia con las normas que preceden el artículo 500 N° 7 del Código de Procedimiento Penal dispone: *“La sentencia*



definitiva de primera instancia y la de segunda que modifique o revoque la de otro tribunal contendrán:

7° La resolución que condena o absuelve a cada uno de los procesados por cada uno de los delitos perseguidos; que se pronuncia sobre la responsabilidad de ellos o de los terceros comprendidos en el juicio; y fija el monto de las indemnizaciones cuando se las haya pedido y se dé lugar a ellas”;

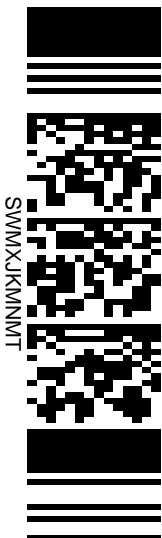
De esta forma, la exigencia legal de congruencia constituye un reflejo del derecho de defensa en cuanto se requiere que la imputación sea precisa y determinada. En efecto, el tribunal debe cautelar la identidad del objeto del proceso, tanto material (mismos hechos y circunstancias) como personal (mismos acusados) todo ello a fin de que el imputado pueda adecuadamente defenderse.

Por su parte en los artículos 8 número 2 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 N ° 3 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requieren, necesariamente, que el acusado conozca, con antelación los hechos que se le imputan para estar en condiciones de poder desvirtuarlos en la respectiva etapa procesal.

De esta forma, ningún hecho o acontecimiento que no haya sido delimitado por la acusación, incluyéndose según se ha asentado la atribución de participación no podrá ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal. En este sentido, el tribunal no podrá incluir en la relación de los hechos que da por probados elementos fácticos que sustancialmente varíen la acusación, ni realizar, consecuentemente, la subsunción con ellos.

Es así como la institución del hecho diverso que se pretende evitar a través de la exigencia de la congruencia se funda en la necesidad del resguardo del derecho de defensa, en particular en cuanto implica la posibilidad de contradecir la atribución de la totalidad de los hechos delictivos y de sus circunstancias con valor penal que, en su conjunto, constituyen el objeto del juicio.

En este mismo orden de ideas, el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal dispone que: *“A nadie se condenará culpable de delito, ni se le aplicará pena alguna sino en virtud de sentencia dictada por el tribunal establecido por la ley, fundada en un proceso previo legalmente tramitado; pero el imputado deberá someterse a las restricciones que con arreglo a la ley se impongan a su libertad o a sus bienes durante el proceso.*

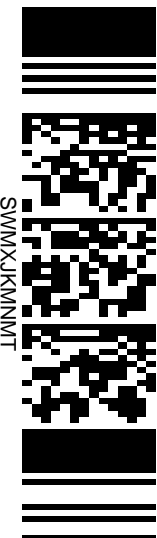


El procesado condenado, absuelto o sobreseído definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometido a un nuevo proceso por el mismo hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º, inciso tercero, y en los Títulos III y VII del Libro III”.

Se estima, por lo tanto, que la sentencia debe mantener la inmutabilidad del núcleo fáctico de la acusación, pues esa sería la forma de establecer el deber de correlación, excluyendo la posibilidad de que se juzguen otros hechos diferentes de los de la acusación.

A vía de ilustrar lo que se viene señalando, sin perjuicio que nos encontramos frente al recurso de apelación, cabe señalar que el artículo 541 N° 10 del Código de Procedimiento Penal, dispone como causal de la casación en la forma *“Haber sido dada ultra petita, esto es, extendiéndola a puntos inconexos con los que hubieren sido materia de la acusación y de la defensa”*.

Nótese, que en un sistema inquisitivo como el vigente a la época de ocurrencia de los hechos, se establecía un deber de correlación de la sentencia con la acusación. Esa necesaria correspondencia entre ambos actos obedece no tanto al principio acusatorio, sino más bien a una forma de asegurar la eficacia de la defensa del acusado. Se refiere al respecto en doctrina que *“Por eso podemos decir que en un sistema inquisitivo donde el que acusa es el mismo juzgador, el deber de correlación sólo se puede explicar y fundar en la necesidad, al menos formal, de reconocer el derecho de defensa y el principio de contradicción. Dejando aparte la cuestión de si se puede hablar realmente de un derecho de defensa efectiva y de la eficacia real del principio de contradicción en un sistema radicalmente inquisitivo y carente de tercioedad, al menos formalmente había necesidad de reconocer al imputado el derecho de defensa y a controvertir los términos fácticos, jurídicos y probatorios de la acusación. En ese contexto el deber de correlación operaba como una norma de preclusión impuesta al juez-acusador, con lo cual la acusación una vez deducida por el juez acotaba los límites dentro de los cuales se iba a realizar la defensa, y se iba a contradecir y debatir la prueba en el plenario, de modo que el juez no podía ex post reformular los términos de la pretensión que debía enjuiciar. Su potestad pretensora había precluido en el mismo momento que la había ejercido y eso le marcaba unos límites al momento de tener que resolver. Lo cierto es que el antiguo Código de Procedimiento Penal mantuvo la vigencia del deber de correlación de la sentencia, contemplándola como*



herramienta más o menos eficaz para tutelar el derecho de defensa del acusado frente a la acusación formulada por el instructor. Al acusado se le aseguraba que la acusación notificada que contenía el señalamiento de hechos jurídicamente calificados, atribuidos al acusado con un concreto grado de participación, no podía ser modificada sustancialmente en la sentencia, de manera que otorgaba la seguridad de conocimiento de la acusación y permitía articular la defensa pertinente. En otras palabras, el acusado tenía, por lo menos, derecho a contestar una acusación bien concretada y a ser juzgado sólo dentro de esa acusación previamente notificada y contestada”. (Del Río Ferreti, C, “La correlación de la sentencia con la acusación y la defensa. Estudio Comparado del Derecho Español con el Chileno”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2007, pp. 516 y ss.)

Por su parte, a fojas 2593 y siguientes, en su informe de 31 de marzo de 2021, el señor Fiscal Judicial señor Calvo, señala que en la sentencia complementaria no se trata o refiere al problema del partícipe y tampoco se precisa en la parte resolutive, por lo que el vicio denunciado aún no se subsana.

De esta forma, sin perjuicio de lo expresado por el señor Fiscal Judicial, se debe absolver al encartado en calidad de autor del delito de abuso sexual cometido en la persona de doña María Luisa Gutiérrez Catalán, en razón a que por dicho hecho no fue previamente sometido a proceso, ni acusado, dado que una decisión en contrario, implicaría vulnerar su derecho a defensa consagrado constitucionalmente, todo ello no obstante, no tener influencia en lo dispositivo del fallo, dado que a pesar de que el Ministro Instructor dictó -en ese sentido-, una sentencia complementaria de carácter condenatoria, aquello no implicó una alteración en la pena a aplicar.

DECIMOTERCERO: Que, por otro lado, en lo apelado, se comparte lo dictaminado por el Ministerio Público Judicial, en su informe de fojas 2384, en el acápite en que estuvo por confirmar la sentencia recurrida, en cuanto fue del parecer de estimar que el acusado reviste la calidad de autor de los delitos de torturas y/o tormentos o apremios ilegítimos de las víctimas Arturo Mariano Droguett Madrid, Luis Alfonso Pérez Moreno, Francisco Ramón Abarca Moreno, Juan Carlos Pérez Muñoz, Marcos Erik Pezoa Salfate, Manuel Jesús Lara Bustamante, Alfonso Araya Salinas, Alfredo Antonio Martínez Córdova, Adolfo Ernesto Lara



Bustamante Orlando Martín Moraga Fuentealba, Joel Antonio Quintana García, David Eleuterio Quintana García y María Luisa Gutiérrez Catalán y de delito de abusos deshonestos en la persona de doña Rosa Victoria Bustamante Valdebenito, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 150 y 366 del Código Penal vigente a la época de ocurrencia de los hechos, tal como señaló en el considerando tercero de la sentencia recurrida, los que deben ser considerados de lesa humanidad y que por tanto, la acción penal es imprescriptible; debiendo en consecuencia rechazarse las alegaciones de la defensa en cuanto a solicitar su absolución.

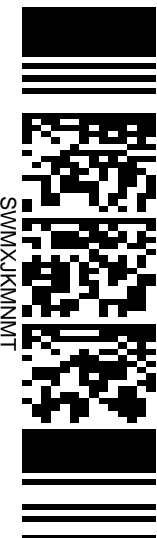
Por su parte, el señor Fiscal, no obstante no constituir el objeto del recurso de apelación presentado por la defensa del encausado, desestimó la media prescripción, prevista en el artículo 103 del Código Penal -motivaciones decimoctava y decimonovena-, la eximente de responsabilidad penal del artículo 10 N° 10 del citado cuerpo normativo -considerando vigésimo- y la atenuante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal y la del artículo 214 del Código de Justicia Militar.

Por otro lado, el señor Fiscal compartió la pena a aplicar por el sentenciador en la fundamentación vigesimoquinta, estimándose que existe un concurso ideal en que debe imponérsele la del delito más grave, aumentada en un grado por la reiteración, aunado a que al encartado le favorecen dos circunstancias minorantes de responsabilidad penal -artículo 11 N° 6 del Código Penal y artículo 211 del Código de Justicia Militar- y ninguna agravante.

II.- EN CUANTO A LAS ACCIONES CIVILES:

DECIMOCUARTO: Que en segunda instancia el Fisco de Chile, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 433 y 434 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en relación con los artículos 175, 177, 310 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, opuso **la excepción de cosa juzgada en relación al demandante don Manuel Jesús Lara Bustamante.**

Funda su excepción señalando que, en estos autos el abogado don Abraham Covarrubias Hernández, a fojas 1688, en representación de don Adolfo Lara Bustamante, don Manuel Jesús Lara Bustamante y de don Alfredo Martínez Córdova, interpuso demanda civil de indemnización perjuicios en contra del Fisco de Chile, solicitando que sea condenado a pagar la suma de \$200.000.000 para cada una de las víctimas, como



reparación por el daño moral sufrido a consecuencia de la detención y posterior delito de apremios ilegítimos de sus representados.

Indica que, por sentencia de primera instancia de 18 de junio de 2019, el Señor Ministro en Visita don Mario Carroza Espinosa resolvió hacer lugar a las demandas civiles, condenando al Fisco y al demandando Luis Alberto Medina Aldea, a pagar en forma solidaria a cada uno de los actores civiles, la suma de \$40.000.000 por concepto de daño moral, incluyendo al demandante Manuel Jesús Lara Bustamante.

Menciona que interpone la excepción de cosa juzgada por existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia dictada en otro proceso. Precisa que según se acreditará con los documentos que se acompañan, el referido actor don Manuel Jesús Lara Bustamante, dedujo demanda civil en contra del Fisco de Chile seguida ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-16.162-2011, caratulados “Aguilar Chandía, Alfonso y otros con Fisco de Chile”, sobre indemnización de perjuicios.

Sostiene que concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que el señalado actor demandó al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de éste por el delito de apremios ilegítimos, ejecutado por agentes del Estado en contra del demandante don Manuel Jesús Lara Bustamante. Puntualiza que dicha demanda era de indemnización de perjuicios por concepto del daño moral sufrido, solicitando la suma de \$150.000.000, por los apremios ilegítimos referidos. Explica que dicha demanda, en primera instancia fue rechazada por sentencia de 01 de abril de 2015, por prescripción y luego, esta Corte, con fecha 22 de marzo 2016, en causa Rol N° 12165-2015, revocó el fallo, disponiendo que se rechaza la excepción de prescripción, ordenando al juez *a quo* emitir pronunciamiento sobre el resto de las defensas opuestas. De este modo, mediante sentencia de fecha 26 de julio de 2016, se complementó la sentencia de primer grado, acogiendo la demanda, condenando al Fisco a pagar la suma de \$7.000.000, respecto del demandante Manuel Jesús Lara Bustamante, y luego, mediante sentencia de esta Corte, de 20 de octubre de 2017, en causa Rol N° 9929-2016, se confirmó el fallo, con declaración que se rebajó a \$3.000.000, la indemnización de perjuicios respecto del señalado demandante. Asimismo, dicha sentencia quedó firme y ejecutoriada al tenerse por desistidos los recursos de casación en la forma y el fondo interpuestos en su contra, mediante resolución de esta Corte, de fecha 19 de diciembre de 2017.



Afirma que, en consecuencia, se demuestra que, por sentencia ejecutoriada, se determinó, en definitiva, el pago al demandante Manuel Jesús Lara Bustamante la suma de \$3.000.000, más reajustes e intereses que establece la sentencia complementaria de primer grado.

Agrega que la liquidación del crédito se practicó el 11 de octubre de 2018, y en ella se encuentra incluido al referido demandante, Cédula de Identidad N° 3.615.109-9. Puntualiza que el giro del cheque se hizo a nombre de su apoderado don Homero Caldera Calderón.

Sostiene que, en este caso, se da la triple identidad requerida. Agrega que existe identidad legal de personas, es el actor ya individualizado don Manuel Jesús Lara Bustamante demandante civil en ambos procesos; siendo, además, el Fisco de Chile el demandado en los dos juicios, por lo que coinciden tanto la identidad física como legal procesal de ambas partes. En cuanto a la identidad legal de cosa pedida: siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en ambos procesos. Y en cuanto la causa de pedir es el delito de apremios ilegítimos, en las dos causas.

De esta forma, solicita tener por opuesta la excepción de cosa juzgada respecto del demandante civil don Manuel Jesús Lara Bustamante y, en definitiva, acogerla, rechazando esta demanda en todas sus partes.

Para estos efectos, acompañó con citación -sin que la contraria hiciere uso de su derecho-, los siguientes documentos:

1.- Copia de la demanda del 20° Juzgado Civil de Santiago, Rol N° C-16162-20011, interpuesta en autos caratulados: “Aguilar Chandía, Alfonso y otros con Fisco de Chile”, en cuya página 3 figura como actor don Manuel Jesús Lara Bustamante, Cédula Nacional de Identidad N° 3.615.109-9, y en la página 21, con el número 46, se detallan los hechos por los cuales demandó al Fisco de Chile, por la misma causa de pedir y objeto pedido que en el presente juicio.

2.- Copia del fallo de primera instancia de la causa indicada en el numeral anterior, de fecha 01 de mayo de 2015, que rechazó la demanda por estar prescritas las acciones -la página 24 de la sentencia con el N° 46, se refiere al demandante Manuel Lara Bustamante-.

3.- Copia del fallo dictado en causa Rol N° 12.165-2015 por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 22 de marzo de 2016, que revocó el



fallo anterior, rechazando la excepción de prescripción, y ordenando al juez *a quo* pronunciarse sobre el resto de las defensas.

4.- Complementación de sentencia de primer grado, de fecha 26 de julio de 2016, donde consta que se acoge la demanda, condenándose al Fisco de Chile a pagar al demandante Manuel Jesús Lara Bustamante la suma de \$7.000.000, al estar incluido en el acápite IV) de la parte resolutive.

5.- Copia del fallo dictado en causa Rol N° 9929-2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 20 de diciembre de 2017, que confirma el fallo del tribunal *a quo* en la causa antes referida, con declaración que rebaja a \$3.000.000, la indemnización respecto de los actores signados en el acápite IV, donde se encuentra el demandante Manuel Jesús Lara Bustamante.

Con fecha 01 de diciembre de 2020, se ordenó como trámite por la Novena Sala de esta Corte, que el 20° Juzgado Civil, remitiera la causa Rol N° 16.162-2011.

Con fecha 17 de diciembre de 2020, se cumplió el trámite decretado y se recibió la signada causa y su custodia -6 tomos-, en las que constan las piezas que acompañó en copia el Fisco de Chile.

DECIMOQUINTO: En doctrina se ha señalado que la cosa juzgada *“Es aquel efecto que producen las sentencias definitivas o interlocutorias firmes o ejecutoriadas, en virtud de las cuales no se puede volver a discutir entre las partes aquella cuestión que ha sido objeto del juicio”* (Orellana, Fernando, Manual de Derecho Procesal, tomo II, Procedimientos civiles ordinarios y especiales, Librotecnia, reimpresión de la 3ª ed. actualizada, 2010, p. 112).

En efecto, la cosa juzgada es una exigencia política y social y no propiamente jurídica, dado que sin su aplicación los juicios carecerían de objeto si no se consiguiera la inmutabilidad de los derechos declaratorios por los tribunales, y la justicia no cumpliría su misión esencial de producir el estado de certeza que requiere la tranquilidad social. Además, la cosa juzgada pasa a ser de la esencia de la jurisdicción, siendo el carácter de irreversible de aquélla, aunado a que constituye un fin del proceso, otorgando certeza a las relaciones jurídicas.

La cosa juzgada tiene rango constitucional en nuestro derecho, ya que el artículo 76 inciso primero de la Constitución Política de la República dispone: *“La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de*

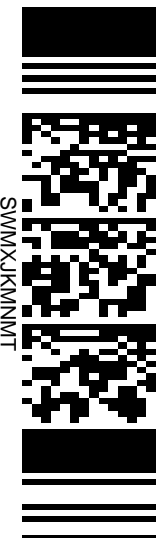


resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.

En nuestro derecho, perteneciente a la tradición continental, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren, tal como lo prevé el artículo 3 inciso segundo del Código Civil establece que *“Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”*. De igual forma, el artículo 9 inciso segundo del cuerpo normativo citado precedentemente prescribe *“Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”*.

Es así como la cosa juzgada tiene una doble característica, por un lado, es coercible -el vencido está obligado a cumplir con la condena que se la ha impuesto, incluso por medios compulsivos (acción de cosa juzgada)- y por la otra, es inmutable -las partes deben respetar lo resuelto y no pueden renovar en un nuevo juicio la misma controversia (excepción de cosa juzgada)-.

También, se ha sostenido que tal excepción tiene lugar cuando concurren dos litigios entre las mismas partes, seguidos ante el mismo o diverso tribunal, siempre que versen sobre igual objeto pedido y con demandas basadas en la misma causa de pedir, de donde se concluye que para su configuración es necesaria la misma triple identidad requerida para la cosa juzgada, con la salvedad que el juicio que da origen a la excepción en mención debe estar pendiente, puesto que de lo contrario procedería la cosa juzgada, teniendo ambas como objetivo principal impedir la dictación de fallos contradictorios (Casarino, Mario, Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, p. 31; Benavente, Darío, Derecho Procesal Civil, Juicio Ordinario y Recursos Procesales, 5ª ed., revisada por Colombo, Juan, 2004, p.23; Anabalón, Carlos, Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno, tomo III, pp. 148-149; Maturana, Cristián, Actuaciones Judiciales, Notificaciones, Resoluciones Judiciales y el Juicio Ordinario, Facultad de Derecho Universidad de Chile, p. 90). Por su parte, se ha indicado que la cosa juzgada *“es la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no*



existen, contra ella otros medios de impugnación que permitan modificarla ” (Couture, Eduardo, citado en “Breves Nociones acerca de la Cosa Juzgada” de los profesores Mosquera, Mario y Maturana, Cristián. Depto. Derecho Procesal, U. de Chile, 1991, pp. 5-6). En el mismo sentido, el profesor Giuseppe Chiovenda la define como *“la afirmación indiscutible y obligatoria para los jueces de todos los juicios futuros de una voluntad concreta de la ley, que reconoce o desconoce un bien de la vida a una de las partes ”* (Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, p. 409).

DECIMOSEXTO: Por otra parte, la Corte Suprema ha señalado que *“hay cosa juzgada cuando confrontando la acción deducida en ambos pleitos, su objeto y fundamento, resulta que es la misma situación jurídica que se pretende someter nuevamente a la decisión judicial, sin que desaparezca esta igualdad de situación por no ser unas mismas las expresiones con que el demandante sustenta su derecho, si sustancialmente tienen el mismo alcance ”*(R.D.J., T. 9, secc. 1ª, pág. 437).

En igual sentido, nuestro máximo Tribunal, con fecha once de noviembre de dos mil veinte, en causa Rol N° 24.688-2020, resolvió: *Quinto: Que, en suma, sobre el particular debe concluirse que el instituto jurídico en referencia atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio y, a la eficacia de la sentencia pronunciada para resolver el asunto que ha sido materia de éste, el que importa una limitación al derecho que, por regla general, tienen las partes para discutir lo decidido y que adquiere vigor en tanto se inicie un pleito con una pretensión ya resuelta en una sentencia ejecutoriada previa. Por consiguiente, su objetivo es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias respecto de las cuales ha recaído ya una decisión, otorgándole un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá en definitiva un grado de certeza que asegure, en un Estado de Derecho, la tranquilidad social, “impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto y da certeza, seguridad y estabilidad jurídica, a quien ha obtenido el reconocimiento de sus derechos ”* (SCS N° 1.289-2005, de 26 de marzo de 2007; 20.520-2018, de 14 de noviembre de 2019; y, 21.015-2020, de 5 de agosto de 2020).

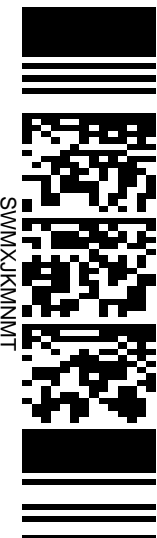
Sexto: Que, al confrontar los dos procesos involucrados, con el objeto de indagar en este caso sobre la concurrencia de la triple identidad entre el fallo que sirve de sustento a la excepción y aquel en que ésta se opone, que



fue cuestionada por el impugnante al tenor de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, aparece que aun cuando existía un pronunciamiento previo, contenido en la sentencia dictada en los autos civiles Rol C-4.460-1999 del 28° Juzgado Civil de Santiago, desestimando la demanda civil intentada, por doña Yasmín Eriksen Fernández Acuña, por la prescripción de la misma, fallo que se encontraba ejecutoriado, la misma demandante civil recurrió a idénticos fundamentos que sirvieron de base para impetrar aquella demanda. En efecto, de la lectura del libelo Rol C-13.485-2016 se advierte que dicha acción también se fundó en el daño moral sufrido con ocasión de la muerte de su cónyuge, a manos de agentes del Estado, el 1° de diciembre de 1975.

Séptimo: Que, el artículo 76 de la Carta Fundamental dispone que, “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, de lo que se colige la improcedencia de la revisión de procesos ya terminados por sentencia que produce cosa juzgada. La única excepción a ello la constituye el recurso de revisión del que conoce la Corte Suprema y que, en todo caso, tiene causales muy específicas establecidas, para esta materia, en el artículo 810 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, no obstante las argumentaciones esgrimidas por la recurrente, decidir lo contrario afectaría los principios básicos que regulan el principio de la cosa juzgada, institución procesal de orden público consistente en el efecto de autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla, siendo sus atributos la inmutabilidad, impugnabilidad y coercibilidad, por consiguiente, solo cabe concluir que los magistrados de la instancia han hecho una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata (SCS N° 20.250-2018, de 14 de noviembre de 2019).

Octavo: Que, sin perjuicio que las razones expresadas precedentemente son suficientes para determinar la suerte del recurso en estudio, este Tribunal estima del caso señalar que aunque no se hubiera incurrido en el referido defecto, éste no podría prosperar, toda vez que, en lo que concierne a la transgresión de los artículos 1°, inciso primero; 5°, inciso segundo; 6°, incisos primero y segundo; 19, N° 3, inciso primero; y, 38, inciso segundo, todos de la Carta Política, en relación a las Fuentes de Derecho Internacional esgrimidas por la recurrente, esta Corte ha señalado,



que no es viable cimentar una casación en el fondo en este tipo de disposiciones, puesto que por ellas se observan principios o garantías de carácter genérico que normalmente encuentran su desarrollo en preceptos legales cuyo verdadero quebrantamiento ha de ser acusado en esta sede (SCS N° 87.827-2016, de 11 de abril de 2017). Que, en lo que interesa al recurso, el arbitrio no indica ninguna disposición concreta y precisa de algún Tratado Internacional suscrito y vigente en nuestro país que establezca en el ámbito del Derecho Internacional la obligación de indemnizar los perjuicios civiles demandados cuando aquello ya fue objeto de una decisión previa con carácter de ejecutoriada. En efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos preceptúa que, “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. En el punto 2, añade que, “En caso de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Que, en consecuencia, de lo reseñado queda en evidencia, que la citada Convención no dispone dejar sin efecto, anular o revocar sentencias judiciales firmes o ejecutoriadas de derecho interno.

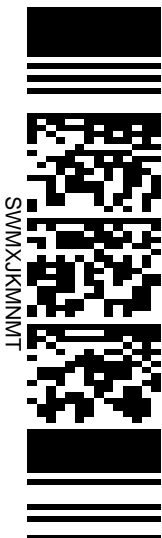
Noveno: Que, semejante omisión no es irrelevante, atendido lo dispuesto en los artículos 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, pues para que esta Corte pueda pronunciarse sobre el libelo de la manera pretendida por la recurrente, esto es, acogiendo el recurso impetrado -que es de derecho estricto- es necesario que la materia objeto del juicio haya sido abordada en cada uno de sus extremos, porque la ausencia del recurso de algún aspecto relacionado con lo decisorio adolece de todas las pretensiones que, en caso de ser aceptadas, pueden justificar la nulidad del juicio.

Décimo: Que, por otra parte en lo que dice relación con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en orden a que no es posible oponer normas de derecho interno para dejar de



cumplir obligaciones de carácter internacional, dicha normativa se refiere a una de carácter sustantiva, pero no de orden procesal como lo es la excepción de cosa juzgada, que tal como se refirió en los razonamientos que anteceden, permite dar certeza y garantía a las partes que aquello que ya discutieron ante un tribunal obteniendo una sentencia firme, no podrá nuevamente ser sometido a juzgamiento.

Undécimo: Que, conforme a lo que se viene razonando, y en lo referente a la conexión entre el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el derecho interno, debe atenderse al sistema de las fuentes del derecho, en concordancia con la soberanía nacional y la autonomía de los tribunales de justicia, siendo menester estarse estrictamente a la estructura del ordenamiento jurídico chileno, el cual no reconoce a las sentencias de tribunales extranjeros la fuerza necesaria para servir de precedente jurisdiccional obligatorio para casos distintos de los que se dictaron. Lo anterior no significa rechazar los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto tales, sino reconocer la supraordenación jerárquica de las fuentes del derecho interno, puesto que por vía de interpretación, los tribunales de justicia chilenos podrán arribar a similares conclusiones, sin la intermediación del control de convencionalidad en cuanto esté referido a interpretaciones contenidas en sentencias del señalado tribunal en causas diversas. Sobre el particular aun cuando se acepte la procedencia del control de convencionalidad en el ámbito interno, ello tiene relación con el llamado “bloque de constitucionalidad”, constituido por derechos fundamentales explícitamente regulados en la Constitución Política de la República, los asegurados por el derecho convencional internacional de derechos humanos a que alude el artículo 5° de la Carta Fundamental y por el ius cogens. Por consiguiente, el objeto del control de convencionalidad es garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en el ámbito interno, y debe realizarse “en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, tal como se expresa en el conocido caso “Almonacid con Arellano”, y que existe la posibilidad de que los Estados establezcan presupuestos formales y materiales de admisibilidad antes de conocer los casos que se someten a la jurisdicción (Núñez, Constanza, Control de Convencionalidad: teoría y aplicación en Chile, Cuadernos del Tribunal Constitucional N° 60, 2015, p. 24-25). Que, en suma, sobre el particular puede concluirse que al realizarse el control de convencionalidad en el



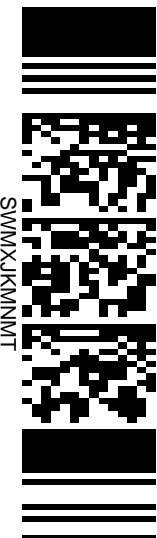
SMMXJIKINMT

marco de las competencias respectivas y de las regulaciones procesales correspondientes, es preciso efectuar una distinción entre regulaciones sustantivas, como es el caso de normas sobre aplicación de la pena de muerte, amnistía en delitos de lesa humanidad e inclusive la institución de la prescripción, con las de forma -las del orden procesal- como es el caso de la institución de cosa juzgada, que queda entregada a las regulaciones procesales internas, como en el caso sub-lite”.

DECIMOSÉPTIMO: De esta forma, se acogerá la excepción de cosa juzgada impetrada por el Fisco de Chile en relación al demandante don Manuel Jesús Lara Bustamante, por cuanto se dan por ciertos los presupuestos para su aplicación, constituidos por la triple identidad legal de personas -las partes que litigaron en ambos pleitos, lo hicieron en las mismas calidades-, de la cosa pedida -beneficio jurídico inmediato que se reclama, esto es, que se condene al Fisco de Chile al pago de una indemnización de perjuicios por el daño moral padecido- y de la causa a pedir -fundamento inmediato del derecho deducido en juicio (indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido a raíz de los mismos hechos antes reseñados)-, de acuerdo a lo estatuido en los artículos 175 en relación con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, sólo respecto del actor antes signado.

DECIMO OCTAVO: Que, asimismo corresponde señalar que no es posible ignorar **la magnitud de la aflicción** que implica para los demandantes el trato inhumano sufrido por cada uno de los afectados, ni la trascendencia del daño ocasionado, el que no puede ser exactamente cuantificada para quienes padecen el dolor.

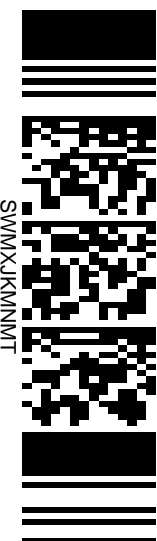
Por su parte, resulta ilustrador indicar que en doctrina se entiende por daño moral, el perjuicio que se sufre como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito que, lesionando la persona o sus bienes, afecta los elementos psíquicos o espirituales que inciden en el normal desarrollo del ser humano. En términos amplios, significaría un menoscabo afectivo, representado en un atentado a los valores o más largamente a los sentimientos de un individuo, en cuanto intereses tutelados por el derecho, que se produce con ocasión de la comisión de un hecho ilícito sobre su persona o bienes. El daño moral desde un punto de vista jurídico puede concebirse, tal como ha sido postulado por la doctrina, como aquel que se caracteriza por atentar contra los derechos de la personalidad y los no patrimoniales de familia, lo que significa que consistirá en la lesión o detrimento que experimenta una



persona en su honor, su reputación, fama, integridad física o psicológica, su libertad, sus afectos, sus cualidades morales de la persona con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia. La determinación del daño moral y la procedencia de su reparación supone, en efecto, la violación o lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido, sea de orden patrimonial o extrapatrimonial, generando otras consecuencias que necesariamente deberán valorarse en esa misma esfera afectiva o sentimental del sujeto perjudicado. Como consecuencia de lo anterior, los daños morales, recubren diferentes tipos de perjuicios o intereses lesionados, que la doctrina moderna denomina “*factores de atribución*” y que corresponden a la esfera afectiva del sujeto en donde se precisa este tipo de daño, el que en la especie se relaciona con *pretium affectionis* o perjuicio de afección que se radica en la esfera íntima del individuo bajo la forma de pena, traumatismo afectivo o inconformidad permanente que sufre como consecuencia de la pérdida de un ser querido. Razonar como se ha sostenido, implica aseverar que la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima son todos aquellos que posee la persona y que deben ser garantizados por el ordenamiento.

Por otro lado, en cuanto a los criterios o pautas de evaluación del daño moral, adoptaremos aquellos que se realizan sobre la base de circunstancias personales de la víctima -edad y valoración de la sensibilidad del lesionado-; los que atienden a la naturaleza del bien afectado (integridad física y libertad sexual) -el que debe primar al momento de cuantificarlo-; los que dicen relación con el hecho ilícito -gravedad objetiva de la falta, postura que tiene como principio que no es posible evaluar el daño moral atendida su naturaleza, es decir, no puede ser cuantificado en dinero, las lesiones extrapatrimoniales, por lo que la indemnización no cumple una función de equivalencia, sino más bien compensatoria- y; los que se fundan en el daño mismo -la gravedad objetiva del daño, modificaciones de las condiciones de existencia y la permanencia de aquél en el tiempo.

Al respecto cabe precisar, que se ha probado que a los actores se les originaron una serie de secuelas psicológicas a raíz de los hechos tenidos por ciertos, constituidos por la angustia, desesperanza, decepción y temor descrito como patología de estrés postraumático, las que por el tiempo transcurrido tienen el carácter de irreversibles, supeditados todos ellos a las agresiones de que fueron víctimas. De esta forma es indiscutible y fácil de comprender el dolor que los demandantes han debido sufrir.

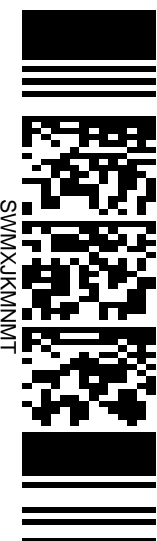


En efecto, el daño moral sólo tiene por objeto reestablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito al estado anterior al mismo, esto es, lo que se denomina la *“restitutio in integrum”* y en el caso de la reparación del daño moral, su función no es la de compensar sino dar a la víctima una ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable. En Chile el principio básico es la reparación integral del daño, esto es, dejar a la víctima en el mismo estado anterior. Se afirma que, todo daño debe ser reparado en toda su extensión, es decir, el objeto de la reparación es poner al demandante en la misma situación en que se encontraría si no hubiese sido víctima del daño causado por el hecho del demandado. El daño aun cuando indemnizable (artículos 2320 y 2329 del Código Civil), siempre supone un mayor grado o menor grado de consecuencias irreparables desde el punto de vista emocional, moral, patrimonial, lo que refleja la necesidad de evitar su irrogación y no sólo de propender a su reparación.

Por su parte, para determinar el alcance monetario del daño moral, no resulta posible recurrir a situaciones análogas, por cuanto en la especie, no existe un patrón que determine la cuantía, pues como se ha dicho, los daños que individualmente sufren las personas por hechos como los acreditados son únicos, personales y probablemente no replicables en situaciones análogas. De ahí, que la determinación del monto del daño moral en estas materias es sólo respecto del caso particular que se somete al conocimiento jurisdiccional. De esta forma, la reflexión anterior lleva a esta Corte a señalar que el daño moral solamente puede ser apreciado para el caso en concreto que se somete a su conocimiento, no siendo extrapolable a otras situaciones.

En estas circunstancias, si bien la causa basal del daño moral radica en los ilícitos que han sido acreditados y los efectos del mismo, su duración en el tiempo, se extienden más allá.

Dada la naturaleza de los hechos ilícitos respecto del cuales surge la obligación para el Estado de Chile de indemnizar, resulta ilustrador traer a colación el análisis económico que ha tenido influencia en el daño moral y señalan que el derecho tendría una función conductual, más que de justicia para el caso particular y esto sería lo relevante porque las personas en el futuro se comportarían de esa forma, esto es, evitar el daño en el futuro -costo de prevención versus que se produzca-, de manera de poder generar incentivos de conducta. En efecto, se persigue inducir al comportamiento



adecuado a los individuos para reducir la producción de daños y los costos sociales que dicho acontecer implica en la sociedad, tal como los que han sido los causantes de los ocasionados a la actora, en atención a que debe ser el Estado el que deba propender a proteger a las personas frente a afectaciones a sus garantías fundamentales, más no es esperable y menos aceptable que sean sus agentes quienes le provoquen sufrimientos, sin respeto a las normas del debido proceso. Sostenemos, que además en este escenario, el derecho civil tiene una función preventiva, esto es, generar un incentivo en el comportamiento de aquél que tiene un mayor reproche y que se quiere disuadir. En este orden de ideas la sanción preventiva o sancionatoria es aquella que tiene por objeto disminuir la incidencia de un hecho ilícito en la sociedad, mediante la fijación del *quantum* de la indemnización, el factor subjetivo de atribución, el control del daño de quien detenta el poder, desincentivándose la comisión de conductas dañosas y dar señales de comportamiento social. No se atiende bajo esta postura al daño para su fijación, sino a la conducta del hechor y de la víctima y a la gravedad del hecho. Por tanto, los daños punitivos deberían aplicarse en los casos que se compruebe que el sujeto actuó en forma dolosa o gravemente culposa en la irrogación del perjuicio, tal como aconteció en relación a los presupuestos fácticos tenidos por ciertos, esto es, como factor subjetivo de atribución, más precisamente, el grado de reproche de la conducta- y; en aquellas circunstancias en que la posición particular del dañante, por ser dominante o poderosa, impide que un simple proceso de responsabilidad lo disuada de incurrir nuevamente en la conducta y de adoptar las medidas de diligencia aconsejables o apropiadas. En estos casos, independiente del factor de atribución, el daño punitivo, se erige como una herramienta para controlar las actuaciones de quien detenta un poder y que, en consecuencia, podría continuar dañando sin que la indemnización fuera un escollo para el efecto.

DECIMONOVENO: Asimismo, no es discutible que el daño moral ha sido ampliamente acreditado en estos antecedentes, tanto en cuanto a su existencia como a su entidad, lo que ha permitido a esta Corte adquirir convicción de que los actores han sufrido durante años una afectación psicológica grave y prolongada en el tiempo, que se originó precisamente en los hechos dañosos que ha sido acreditado en este proceso y del que fue víctima.



De esta forma, se ha tenido presente que la indemnización determinada por el Ministro Instructor se ajusta al dolor y aflicción padecido por los actores como consecuencia de los hechos acreditados.

VIGÉSIMO: En conclusión, una vez que se acreditaron las secuelas sufridas por los actores, en cuanto al dolor, la angustia y consecuencias negativas que les produjeron, considerándose los parámetros antes desarrollados, además de la gravedad de los hechos ilícitos, sus consecuencias y las circunstancias en que aquél aconteció es dable considerar que en la especie, el daño se ha prolongado en el tiempo, lo que se ha materializado en heridas sin cicatrizar, ocasionándosele efectos psicológicos de carácter permanente, los que han sido explicitados latamente en la sentencia en alzada, aplicándose los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

VIGESIMOPRIMERO: En este orden de ideas, se comparten los razonamientos vertidos en las motivaciones a través de las cuales el sentenciador *a quo* arribó a la decisión de acoger **la acción civil, desestimándose la excepción de prescripción y de pago**, en las motivaciones trigésimo y trigésimo primero, los que se tienen expresamente reproducidos.

En efecto, constituye una máxima del Derecho Internacional que los primeros llamados a garantizar y promover el respeto a los derechos humanos son los Estados, ocupando los organismos internacionales un rol más bien orientador y fiscalizador de estas obligaciones, a la vez que subsidiario en materia jurisdiccional. Es por estas razones que los instrumentos internacionales comprenden dentro de los imperativos jurídicos, dirigidos a los Estados Partes, la necesidad de que éstos garanticen a los particulares la existencia de recursos judiciales eficaces (Pacto de Derechos Civiles y Políticos artículo 2 N° 3 letra b; Convención Americana sobre Derechos Humanos artículo 25, sólo por citar algunos ejemplos) al tiempo que ordena que se asegure una justa y adecuada reparación a las víctimas de estas violaciones (es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en su artículo 14) junto con la necesidad que se remuevan las trabas internas que impidan el goce efectivo de los derechos consagrados en dichos instrumentos. Como se observa, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, obliga a los Estados a que: primero, aseguren el goce efectivo de sus derechos humanos; segundo, que otorguen a los sujetos de estos derechos la posibilidad cierta de activar los recursos



judiciales que sean eficaces para salvaguardar tales garantías -constituyendo este derecho a recurrir no sólo una medida procesal, sino un derecho humano autónomo-; y por último, obligando al Estado a reparar a las víctimas de estas violaciones, siendo imperativo que se dispongan los medios para que dichas vulneraciones no se repitan. Asimismo, la acción objeto de la presente causa tienen una naturaleza humanitaria, motivo por el cual se debería adoptar una decisión a partir de los postulados del derecho internacional, en particular en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Al respecto es dable sostener en primer término, que tratándose de una violación a los derechos humanos el criterio rector, en cuanto a la fuente de la responsabilidad civil está en las normas y principios de derecho internacional de derechos humanos y ello ha de ser necesariamente así, porque este fenómeno de graves transgresiones es muy posterior al proceso de codificación, el que no lo considera por responder a criterios ligados de manera directa con el interés privado y por haber sido la cuestión de los derechos fundamentales normada y conceptualizada sólo en la segunda mitad del siglo XX.

De esta forma, conforme a lo anteriormente expuesto, la acción indemnizatoria deducida en autos por los actores, no es de índole patrimonial como se ha asegurado, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relación contractual vinculada a un negocio común o extracontractual sino, simplemente, humanitaria. Por su parte, no puede negarse el carácter de delito de lesa humanidad aquél que sirve de fuente u origen a la acción impetrada por los actores, por lo que en lo tocante a la indemnización de perjuicios hace aplicable también en lo que dice relación al acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares para *“conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”* (Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 14 de marzo de 2001) los convenios o tratados internacionales *“que deben ser interpretados y aplicados de acuerdo con las reglas generales de cumplimiento de derecho internacional y de buena fe (bonna fide), (pacta sunt servanda), regla de derecho internacional que se considera ius cogens, y además derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la que se encuentra vigente en nuestro país, desde el 27 de enero de 1980, y que establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales; de hacerlo*

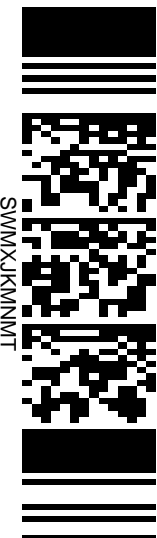


comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del Estado” (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, Las Constituciones Latinoamericanas; página 231)

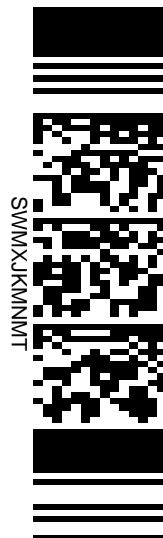
En este orden de ideas, se colige que la obligación indemnizatoria está originada para el Estado, tratándose de la violación de los Derechos Humanos, no sólo por la Constitución Política sino también de los Principios Generales del Derecho Humanitario y de los Tratados Internacionales sobre la materia, como expresión concreta de los mismos, de tal suerte que las normas del derecho común interno se aplicarán sólo si no están en contradicción con esta preceptiva.

Por su parte, en cuanto a las alegaciones del Consejo de Defensa del Estado, tendientes a desconocer su responsabilidad civil es dable reflexionar que, sin perjuicio de concordar estos sentenciadores sobre el particular con lo expresado en la sentencia que se reproduce en su parte civil, lo que bastaría para desecharlas, se tiene además presente en cuanto al **rechazo de la excepción de pago** que, la Ley N° 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, no establece de modo alguno la incompatibilidad entre la reparación pretendida en estos antecedentes y aquéllas que se hayan obtenido en virtud de leyes o normas especiales. Así como el rechazo de la petición subsidiaria de considerar los beneficios recibidos por planes de reparación, como parte imputable a la indemnización del daño que se solicita desde que las leyes creadas con fines reparatorios, tienen una finalidad distinta a la indemnización que se persigue en estos autos.

Al respecto es dable señalar, que las pensiones de reparación se adscriben en un marco general que se denomina Justicia Transicional y es desde ese contexto desde donde debemos abordar el asunto. Los alcances de esos objetivos han sido intensamente debatidos en estrados judiciales y en particular ante la Corte Suprema a partir de la defensa que el Estado ha deducido con la excepción perentoria de pago, contemplada en el Título XIV del Libro IV del Código Civil (“De los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo), que dispone en su artículo 1567 que “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo o parte: 1° Por la solución o pago efectivo;”. En



síntesis, el Fisco de Chile adujo que una acción jurisdiccional reparatoria es incompatible con los fondos que fueron proveídos a los afectados en el contexto de las políticas transicionales y que de aceptarse ello importaría una doble reparación. Para contextualizar esta afirmación es necesario recordar que a partir de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación se adoptaron una serie de medidas de justicia y reparación hacia las víctimas de violencia política en el periodo histórico que va desde el año 1973 al año 1990, bajo el entendido que fue el Estado de Chile el responsable de las violaciones a los derechos humanos durante este periodo. En ese sentido, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación consignó que: *“Es sabido que un mismo hecho puede generar distintas responsabilidades y, por tanto, distintas sanciones. Desde el punto de vista legal, puede haber responsabilidad penal, administrativa, civil (contractual y extracontractual) o política. Desde un punto de vista de las normas efectivas o sociales, se puede hablar de responsabilidad moral, histórica, y en un sentido distinto del término, también responsabilidad política”* (“Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, Tomo I, Reedición, año 2007, p. 21) Para el Estado de Chile, señala el Informe, existe responsabilidad moral *“y que tal determinación no tiene efectos legales, como no sea servir de antecedente para medidas de reparación que los poderes del Estado quieran arbitrar, dentro de sus propias atribuciones. Finalmente, la Comisión deja constancia de que su determinación de responsabilidad moral es sin perjuicio de otras responsabilidades del Estado o de individuos que puedan establecerse por la Justicia o por otros órganos competentes”*. Como se observa, los comisionados del Estado dejan constancia del fundamento de esta responsabilidad que puede dar origen a una reparación por parte del Estado, lo es sin perjuicio de otras responsabilidades. Bajo estos criterios se implementaron con el correr de los años una serie de medidas traducidas muchas ellas en leyes. En efecto, respecto a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el 25 de abril de 1990 mediante Decreto Supremo N° 355, la que, junto con establecer el panorama general de las violaciones a los derechos humanos, así como identificar a la mayoría de las personas víctimas de homicidio y secuestros, realizó recomendaciones para la reparación y reivindicación de las víctimas, reparación simbólica y prestaciones sociales de bienestar. Estas recomendaciones se tradujeron en la



dictación de la Ley N° 19.123 y la creación del Programa PRAIS. Esta misma normativa creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación con el objeto de llevar adelante estas tareas y continuar la calificación de casos de violación a los derechos humanos, dictándose al efecto algunas leyes complementarias (Leyes N° 19.274, N° 19.358 y N° 19.441). De esta forma, cabe precisar que la Ley N° 19.980 amplió los beneficios aumentando las pensiones otorgadas por la Ley N° 19.123, incluyendo a los padres en caso de ausencia o renuncia de la madre de la víctima directa de los crímenes.

En este orden de ideas, uno de los problemas en relación a este acápite ha sido determinar el alcance del artículo 24 de la Ley N° 19.123, que establece la compatibilidad de los beneficios con otras pensiones, a saber: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”*

En efecto, la normativa invocada por el Fisco -que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, asumidas voluntariamente por el Estado, presupuesto que no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley. Se observa entonces, que de privarse unilateralmente el derecho a demandar, ello supondría una atribución prohibida por la ley, traduciéndose esta limitación unilateral en una restricción al ejercicio de un derecho fundamental -el de reparación- la que debiera ser interpretada de manera restrictiva, utilizándose los ya citados criterios de hermenéutica sustentados en la aplicación de “buena fe” de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y en las disposiciones de derecho internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional. Dichas reglas deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico, según se ha indicado, al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquella normativa de orden jurídico nacional que posibilitaría eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno. Asimismo, la citada ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que ahora reclama el



representante del Fisco y que su pago haya sido asumido por el Estado voluntariamente, por cuanto no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley. En consecuencia, los beneficios establecidos en dicho cuerpo legal, no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral sufrido por las víctimas como consecuencia de la existencia de un hecho ilícito.

Por su parte, sin mediar una previa determinación convencional de lo que se debe, no puede sostenerse en propiedad que haya existido pago o solución de lo que se adeuda. Dicho de otro modo, sin que preexista una obligación de objeto determinado llamada a extinguirse, no ha podido verificarse el pago de lo que se adeuda, sin que pueda atribuirse por analogía esa naturaleza jurídica a las acciones reparatorias emprendidas por el Estado de Chile. De allí se sigue que llevar la limitación impuesta del derecho civil interno hacia una controversia relativa a derechos fundamentales, supone una interpretación extensiva de la norma interna cuyo resultado es la restricción de una garantía de orden constitucional e internacional, suponiendo el desconocimiento del principio pro administrado, además de una inobservancia de la limitación proporcional de los derechos de las personas, la inaplicación de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la vulneración de la prohibición, reconocida en el derecho convencional, de no apelar al derecho interno para incumplir las obligaciones internacionales, aunado el no respeto del principio de la reparación integral, que se encuentra presente en el derecho interno y en plano internacional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: *“Ahora bien, la controversia radica en el monto que debe otorgarse a la víctima como compensación por el daño inmaterial. Al respecto, la Corte no considera apropiado que se utilice un porcentaje de los daños materiales para fijar la indemnización por los daños inmateriales. Revisten naturaleza distinta y no dependen el uno del otro. Además, no es posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso. Sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad, teniendo en cuenta*



además que la jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una forma de reparación.”

Por otro lado, es dable tener en consideración en primer término, que debido a que en las leyes de reparación se excluyen a algunos afectados, aceptar sus limitaciones conllevaría una solución que, en la práctica, bien podría resultar discriminatoria. Sobre el particular, es necesario recordar que la propia Ley N° 19.123 permitió entregar pensiones de gracia, en el entendido que bajo determinadas situaciones algunos legitimados podrían resultar excluidos. Entonces, si el propio legislador previó estas discriminaciones, nos resulta cuestionable que luego en una sede jurisdiccional, sea el Estado quien defienda su derecho a hacer tal discriminación impidiendo a la justicia revisar estos criterios. En segundo lugar, un acto del Estado, al que se le asigna naturaleza de clausura significaría una privación del derecho de petición, contrario a las normas del debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 de nuestra Carta Fundamental. Al respecto cabe recordar que así lo ha resuelto -reiteradamente- nuestro máximo Tribunal de Justicia:

“CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que, en relación a un quinto capítulo denominado "Improcedencia de la indemnización en el caso de haber sido ya indemnizados los actores de acuerdo con la ley 19.123”, por la que se busca obtener la improcedencia de la indemnización demandada al cobijo de los términos que dispone la Ley citada, tal alegación del Fisco será desechada, toda vez que no resulta incompatible con la reparación material el daño moral sufrido por las víctimas como consecuencia de la comisión de los delitos cuya certeza se obtiene recién como resultado de este proceso. Por lo demás, el espíritu de la ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992, respecto de los beneficios allí contemplados, expresa que éstos dicen relación con los compromisos adquiridos por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar ejecutar y promover las acciones que fueran necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas a su vez en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, circunstancias éstas que en ningún caso pueden confundirse con aquéllas que emanan del derecho común, relativas a la responsabilidad civil como consecuencia de un delito, conforme expresamente lo disponen los artículos 2.314 y siguientes del Código Civil, por lo que claramente el derecho ejercido por la actora, tanto para requerir la bonificación y la



pensión mensual antes referidas como el que la habilitó para demandar en estos autos, emanan de fuentes diversas.

QUINCUAGÉSIMO: Que, a mayor abundamiento, la normativa referida en el numeral que antecede, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno la incompatibilidad a que se refiere el Fisco de Chile en su contestación, sin que sea procedente suponer aquí que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de que se trata ante, la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata, en definitiva, de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado, voluntariamente en el primer caso, no importando de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia (...)”

En cuanto a la alegación del Fisco de Chile para que se declare improcedente la indemnización por daño moral que se ha demandado en razón de que, de conformidad con la Ley N° 19.123, los actores obtuvieron bonificación compensatoria, pensión mensual de reparación y otros beneficios sociales, los cuales, por los motivos que señala, serían incompatibles con toda otra indemnización, tal alegación debe ser igualmente rechazada, por cuanto la ley citada, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, concede pensión de reparación y otorga otros beneficios a los afectados, pero no establece de modo alguno tal incompatibilidad, sin que sea procedente suponer aquí, que la referida ley se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de los derechos humanos ante la evidencia de que las acciones para obtener aquello se encontrarían a la fecha prescritas. Se trata, en consecuencia, de dos formas distintas de reparación y que las asuma el Estado -voluntariamente en aquel caso- no importa de modo alguno la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare, por los medios que autoriza la ley, su procedencia. Al efecto, el propio artículo 4° de la ley N° 19.123, refiriéndose, en parte, a la naturaleza y objetivos de la misma, expresa que *“En caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas*



individuales. Si en el cumplimiento de sus funciones la Corporación tuviere conocimiento de hechos que revistan caracteres de delito, deberá ponerlos, sin más trámite, en conocimiento de los Tribunales de Justicia”. (E. Corte Suprema Rol N° 4662-2007)

De acuerdo a lo que se ha venido razonando, se desestima la alegación del Fisco de Chile, en torno a sostener que la sentencia recurrida resultaría constitutiva de agravio, en atención a haber rechazado la excepción de pago interpuesta oportunamente por su parte.

Por otro lado, en lo tocante a la alegación de **excepción de prescripción** sostenido como uno de los acápites de la apelación del Consejo de Defensa del Estado, se debe tener además presente que al contemplarse en el artículo 2497 del Código Civil que las reglas de prescripción *“se aplican igualmente a favor y en contra del Estado”*, debe considerarse que ello no resulta pertinente a esta materia, atendida su particular naturaleza, según se ha dejado en evidencia; y, por el contrario, corresponde tener presente las contenidas en los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De esta forma, de acuerdo con esta última norma, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar preceptos de derecho interno.

Asimismo, las referidas normas hacen eco del imperativo contenido en el artículo 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos, la que no puede ser interpretada en el sentido de sustraer de la necesidad de esas medidas de otro carácter al poder judicial, ya que, éste es parte del Estado de Chile, de tal manera que aún en el caso de no existir una reforma legislativa, el juez igualmente está llamado a realizar la integración jurídica que sea necesaria para amparar los derechos humanos de los particulares sujetos a su jurisdicción, dado que de otra manera se estaría incurriendo en responsabilidad internacional. Por otra parte, acotar el sentido del artículo 2° de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo a los poderes ejecutivos y legislativos, se traduciría en una interpretación de mala fe del tratado, cuestión que va en contra del objetivo y fin de la fuente del derecho antes signada. Lo anterior además de constituir un principio general del Derecho Internacional es una necesidad contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Por su parte, retomando el principio de la coherencia jurídica del argumento de la imprescriptibilidad sostenido en materia penal respecto de



los delitos de lesa humanidad, no resulta atendible y consecuente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, por lo que resulta contrario a derecho declarar prescrita la acción intentada por los actores contra el Estado de Chile. A resultas de lo explicado, no era aplicable la normativa interna del Código Civil, cuyo diseño y redacción no es propio de la naturaleza de los hechos tenidos por ciertos y que, como ya se adelantó, corresponden a un delito de lesa humanidad, por lo que no es posible sujetar la acción civil indemnizatoria a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna como reclama el representante del Fisco. De esta forma, el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente, implica desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna.

En relación a la argumentación sustentada en base a la coherencia jurídica resulta ilustrador tener presente lo sostenido por el autor Gonzalo Aguilar Carvallo: *“A partir de los mismos hechos, emanan los mismos principios, son los mismos principios que operan y rigen la misma situación. Tanto la acción penal -que se estima imprescriptible y no hay debate en aquello por el tribunal- como la acción civil emanan de una misma situación de hecho, el crimen internacional, en consecuencia, los principios aplicables a la situación son los mismos, tanto a la acción civil como a la acción penal. Cualquier diferenciación efectuada por el juez, en cuanto a separar ambas acciones y otorgares un tratamiento diferenciado es discriminatoria y no guarda coherencia”* (Aguilar Carvallo, Gonzalo, “Evolución de la jurisprudencia en materia de imprescriptibilidad de la acción civil en casos de violación de los derechos humanos”, Gaceta Jurídica N° 341, Santiago, año 2008, p.20)

En el mismo sentido, ha sido resuelto por nuestro máximo Tribunal al señalar: *“Que, en síntesis, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre*



prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental” (Corte Suprema Rol N° 2918-2013)

En este contexto, las mentadas directrices dicen relación con abordar la prohibición de aplicar la analogía para resolver la presente controversia a la luz de las normas sobre prescripción contenidas en nuestro Código Civil; respetar el deber de proporcionalidad en la toma de decisiones; la no discriminación como criterio rector y; la integración normativa del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos como una necesidad; postulados que no necesariamente se coligen de la lectura de una norma en particular, sino que tienen que ver con la fundamentación del sistema jurídico en su conjunto -interpretación sistemática o integración- cuyo objeto y fin no es otro que la protección de la persona humana, teniendo para ello en consideración los bienes jurídicos protegidos en uno y otro caso.

De esta manera, la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas *ius cogens* por la comunidad jurídica internacional implican no hacer extensible las normas de prescripción aludidas por el recurrente Consejo de Defensa del Estado. En este sentido, dichos preceptos deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, pero por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

Por su parte, la Corte Interamericana ha aclarado, además, que el artículo 63.1 de la Convención que consagra el deber de reparar, no se remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de modo que *“acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. La obligación de reparar se regula por el derecho internacional y no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones de su derecho*



interno” (Corte I. D. H., caso La Cantuta vs Perú. Sentencia de 29 de noviembre 2006).

En conclusión, dados los argumentados jurídicos desarrollados latamente en las motivaciones que preceden, se desestimaré la alegación de la recurrente Fisco de Chile, en torno a estimar como agravante el rechazo que el juez de la instancia efectuó de la excepción de prescripción impetrada por su parte.

VIGESIMOSEGUNDO: Que la concesión de reajustes respecto de una cantidad que se ordena pagar judicialmente obedece a la necesidad de velar por que la moneda mantenga su poder adquisitivo conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, pero tratándose de daño moral corresponde otorgarlo desde la fecha en que la sentencia que los fija queda ejecutoriada, pues es esa la ocasión en que aquellos han quedado determinados, y hasta la época de su pago efectivo.

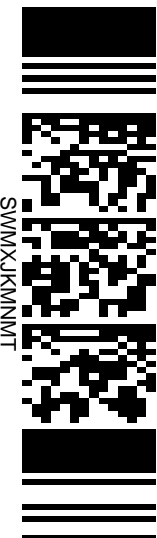
Por su parte, los intereses se deberán desde que la sentencia quede ejecutoriada tal como consignaba el fallo de primer grado.

VIGÉSIMOTERCERO: Que, por otro lado, dado que se acogió la excepción de cosa juzgada impetrada por el Fisco de Chile y atento lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por esas consideraciones y de conformidad, a lo previsto en los artículos 1, 5, 10 N° 1, 4, 8 y 10, 11 N° 6, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 28, 29, 50, 51, 68, 69, 103 y 141 del Código Penal y los artículos 10, 42, 108, 109, 110, 481, 482, 488, 500, 509, 514, 527 y 533 del Código de Procedimiento Penal:

I.- Que **se revoca** la sentencia apelada de fecha diecisiete de diciembre de dos dieciocho, escrita a fojas 2169 y su complemento de fojas 2573, sólo en cuanto por ella:

- a) Se condenó a Luis Alberto Medina Aldea en calidad de autor del delito de abusos deshonestos, previsto en el artículo 366 del Código Penal -vigente a la época de ocurrencia de los hechos-, en la persona de doña María Luisa Gutiérrez Catalán y en su lugar, se decide que **se absuelve** por dicho acápite.
- b) Se condenó en **costas** al Fisco de Chile, eximiéndosele en consecuencia, de su pago, atendido lo razonado en la motivación vigésima tercera.



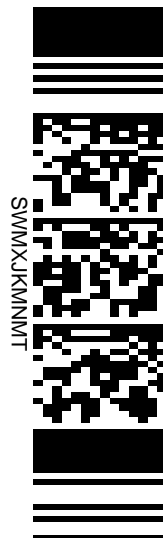
- c) Se acogió la demanda civil deducida a fojas 1688 por don Manuel Jesús Lara Bustamante y se decide, en su lugar, que, **acogiéndose la excepción de cosa juzgada** opuesta en segunda instancia, por el demandado Fisco de Chile en su presentación de fojas 2507 y siguientes, **se la rechaza**, sin costas por haber tenido motivos plausibles para deducirla. en relación a don **Manuel Jesús Lara Bustamante**.

II. Que se confirma, en lo demás apelado, la aludida sentencia.

Acordada la confirmatoria contra el voto del Ministro señor Mera, quien estuvo por revocar en esa parte el fallo en alzada y rechazar las demandas en todas sus partes, sin costas por haber tenido los actores motivos plausibles para litigar. Tuvo presente para ello:

1º) Que la acción ejercida por los demandantes es de índole patrimonial, desde que se demanda una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios. Esta obligación del Estado proviene de un acto ilícito cometido por sus agentes, esto es, se trata de un caso de culpa aquiliana o responsabilidad extracontractual. Y por no haber un estatuto jurídico de responsabilidad extracontractual del Estado propio, distinto del establecido en el Título XXXV del Libro IV del Código Civil, resulta aplicable para el demandado de autos lo dispuesto en el artículo 2332 del mismo cuerpo legal.

2º) Que, en efecto, en fallo de 27 de junio de 2006, dictado por la Corte Suprema de Justicia en causa Rol N° 508-2006, se señaló que no por ser la responsabilidad estatal de índole constitucional y de derecho público, no pueden extinguirse por el transcurso del tiempo, *“dado que por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas que corresponden al derecho Público (...)”*, doctrina que el disidente hace suya. Por lo demás, no existe disposición alguna -ni interna ni internacional que obligue a la República- que establezca la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado y, antes al contrario, existe una norma expresa en sentido contrario, como lo es el artículo 2497 del Código Civil, al señalar que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.



3º) Que incluso el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, en sentencia de 21 de enero de 2013, en autos Rol N° 10.665-2011 sentó la doctrina anterior y agregó que ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni la Convención Americana de Derechos Humanos estaban vigentes al momento de suceder los hechos de esta causa pero, sea como fuere, ninguno de estos instrumentos o uno distinto ha dispuesto la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado. Luego, parece obvio que al no haber norma interna ni establecida en tratados internacionales ratificados por Chile que determine la imprescriptibilidad de estas acciones, rige con todo su vigor el citado artículo 2497 del Código Civil.

4º) Que el artículo 2332 del Código Civil establece un plazo de cuatro años para la prescripción de la acción deducida en estos autos, plazo que se contabiliza desde que se cometió el acto ilícito, ya que la expresión “perpetración del acto” utilizada en la norma legal recién citada, tiene un sentido amplio, que comprende la realización de una acción u omisión que provoca el daño que motiva el resarcimiento de los perjuicios supuestamente causados. Estos actos consisten en las torturas, apremios ilegítimos y abuso deshonesto sufridos por las víctimas antes individualizadas, por lo que, a la fecha de la notificación de la demanda -5 de octubre de 2018, según rola a fojas 1771-, el plazo que establece el artículo 2332 del Código Civil había transcurrido en exceso.

5º) Que aun cuando el plazo se cuente desde que el país volvió a la normalidad democrática, el 11 de marzo de 1990, igualmente estaría cumplido el plazo de prescripción de cuatro años referido.

6º) Que, en consecuencia, la acción deducida está extinguida por la prescripción y procede así declararlo.

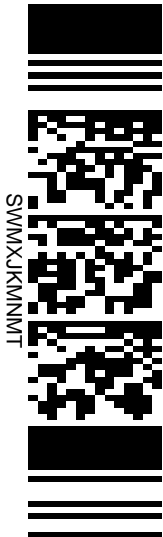
Regístrese, notifíquese y devuélvase en su oportunidad con sus Tomos y custodias.

Redacción de la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero.

Rol N° Criminal 4261-2019



Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero y el Ministro suplente señor Sergio Padilla Farías.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Cristobal Mera M., Veronica Cecilia Sabaj E. y Ministro Suplente Sergio Enrique Padilla F. Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

